

Drogas, Democracia y Seguridad

El impacto del crimen organizado en el sistema político en América Latina



Drogas, Democracia y Seguridad

El impacto del crimen organizado en el sistema político en América Latina

Dirk Kruijt

QUEREMOS
A
SANDRA TORRES DE COLOM
DE
PRESIDENTA

QUEREMOS
A
SANDRA TORRES DE COLOM
DE
PRESIDENTA

Contenidos

Presentación	
Bernard Bot	5
Introducción	
Dirk Kruijt	7
El Problema Hace 25 Años	10
El Crimen Organizado en América Latina	11
Datos sobre las Drogas, los Ingresos y las Rutas del Tráfico	13
México	21
Guatemala y el triángulo norte de América Central: El Salvador y Honduras	27
Colombia	35
Bolivia y Perú	43
Las Políticas Anti-Drogas de Represión y Prevención	51
Recomendaciones	55
Lista de Siglas y Expresiones	59
Lista de Entrevistas	62
Bibliografía	65
Colofón	72

El Instituto Holandés para la Democracia Multi-partidaria (NIMD) es una organización de partidos políticos en los Países Bajos para partidos políticos en democracias jóvenes. Fundado en el año 2000 por siete partidos (CDA, PvdA, vvd, GroenLinks, D66, Christen Unie en scp), NIMD trabaja actualmente con más de 150 partidos políticos de 16 países en África, América Latina, Asia y Europa Oriental.

4

NIMD apoya a las iniciativas conjuntas de los partidos para mejorar el sistema democrático en su país. NIMD también apoya el desarrollo institucional de los partidos políticos, ayudándoles a desarrollar sus programas partidistas y en sus esfuerzos por reforzar sus relaciones con organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación social.

Esta es una publicación del NIMD. Publicaciones del NIMD no reflejan cualquier interés nacional o político. Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente representan la opinión del NIMD. Al hacer referencias a países se ha procurado usar los nombres que en el momento de la recolección de datos eran de uso oficial.

Presentación

Como se dijo durante un seminario¹ en Lima en febrero 2011, "En muchos países alrededor del mundo y específicamente en América Latina, se suele percibir a los políticos y los partidos políticos como parte de redes ilícitas, elitistas y corruptas. Con el tiempo, esto ha incrementado la desconfianza pública hacia los parlamentarios, partidos políticos, e incluso hacia las instituciones estatales, produciendo un menguante respeto para la autoridad y menor legitimidad institucional. Este problema plantea desafíos, incluso en términos de la seguridad, desarrollo y consolidación democrática a nivel mundial, particularmente en los Estados menos resilientes o los Estados que surgen del conflicto, para los cuales es difícil o imposible fomentar y exigir la rendición de cuentas."² Este desafío plantea una amenaza para la estabilidad del continente latinoamericano, especialmente en los países con una débil institucionalización estatal que no permite que los Gobiernos frenen su devastadora influencia en la sociedad.

Pese a un vasto acervo bibliográfico sobre estos temas y las enormes sumas de dinero invertidas para desarrollar respuestas políticas y operativas para enfrentarse a los desafíos planteados por los criminales organizados y los políticos corruptos y demás actores estatales, permanecen desafíos significativos. Este informe que investiga los hechos y revisa las políticas fue realizado por encargo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). Debido a la naturaleza del mandato del NIMD – trabajar directamente con los partidos políticos – frecuentemente se enfrenta con los desafíos de la corrupción, de los vínculos entre los partidos políticos y las redes ilícitas y las ambigüedades en el financiamiento de las campañas políticas. En algunos países con programas NIMD en América Latina, las 'fuerzas subyacentes' influyen negativamente e impiden el fortalecimiento y funcionamiento de los partidos políticos y, por lo tanto, el desarrollo del Estado.

En cooperación con el Centro para la Cooperación Internacional (CIC) de la Universidad de Nueva York, IDEA Internacional y el Open Society Institute (OSI), NIMD contribuye a un proyecto para comprender las 'fuerzas subyacentes' que influyen en el funcionamiento del Estado en general y el fortalecimiento y funcionamiento de los partidos políticos en particular. Como parte de este proyecto, el presente estudio se inició como primer paso para adquirir un mayor entendimiento del tema de la 'Democracia y Seguridad en América Latina'. Los resultados de este estudio se utilizarán para desarrollar una estrategia regional y a largo plazo en los programas de NIMD para apoyar a la democracia en América Latina.

Bernard Bot

Presidente del Directorio de NIMD

¹ Seminario sobre el Crimen Organizado y la Captura del Estado, Lima, Perú, febrero 2011, Organizado por NYU-CIC NIMD, IDEA y OSI

² Kavanagh, C. (2011), Documento de Antecedentes: *Inter-Regional Dialogue, State Capture and Organized Crime or Capture of Organized Crime by the State*, Universidad de Nueva York, Centro para la Cooperación Internacional.

Introducción³

Dirk Kruijt

7

Este estudio hace un análisis comparado del impacto del crimen organizado y específicamente la criminalidad relacionada con las drogas, en el sistema político latinoamericano y del Caribe. Según los términos de referencia, el estudio se enfoca en México, Guatemala, Colombia y Bolivia. Un primer borrador de este informe se presentó en una conferencia patrocinada por la Universidad de Nueva York, IDEA, Open Society y NIMD en Lima (8-11 febrero 2011). Durante mis viajes y recolección de datos, agregué información adicional sobre otros países aparte de los cuatro enfocados, para facilitar una visión más general del problema. Durante una misión anterior en 2010, ya había acumulado información sobre el crimen organizado y las drogas en América Central y los países andinos. El resultado es que este estudio presenta datos comparados sobre los tres países andinos que son los mayores productores de coca y los países mesoamericanos de transición más afectados (México y el Triángulo Norte de América Central).

Los siete países analizados en este estudio tienen diferentes perfiles con respecto a su estabilidad interna, su nivel de violencia criminal, la solidez de sus instituciones políticas, sus instituciones de seguridad y su poder judicial, y sus políticas nacionales con respecto al cultivo de la coca, la producción de la cocaína y la prevención del delito. Los efectos sobre el sistema político, las instituciones clave y los partidos políticos son diferentes también.

Colombia y México sufren impactos fuertes por la violencia criminal. La característica predominante de estos dos países es que el cultivo de la coca y la producción de la cocaína son estrictamente ilegales y penalizados. La estrategia vigente en ambos países es una respuesta militar, con fuerte apoyo financiero y de inteligencia de los organismos del Gobierno estadounidense. Perú y Bolivia, países que cultivan la coca y producen la cocaína, son significativamente más tolerantes hacia los cocaceros, que generalmente son campesinos pobres que cultivan la coca. Estos dos países son menos afectados por la violencia relacionada con el crimen. El nivel de violencia directamente asociada con el cultivo de la coca y la producción de cocaína es extremadamente alto en Colombia, asombrosamente moderada en el Perú, y considerablemente bajo en Bolivia.

Al contrario de la opinión de algunos participantes en el debate sobre el crimen organizado y el Estado, no hay Estados fallidos en América Latina, aunque sí existen áreas donde no hay un control efectivo estatal. Aun en Colombia y México, las regiones y ciudades centrales sufren relativamente poco el impacto de las narco-guerras y la correspondiente violencia. En América Central, y en particular en Guatemala, las fuerzas de seguridad están a la defensiva. En

³ El autor agradece a Daniel Brombacher y Günther Maihold (SWP Berlín), Raúl Benítez (UNAM México), Andrea Gómez (CNRR Bogotá), Alejo Vargas (Universidad Nacional Bogotá), Guido Riveros (FUBODEM La Paz) y Godofredo Sandoval (PIEB La Paz) por su generosidad, al compartir sus datos de investigación y su interpretación de los eventos y procesos actuales.

todos los países, la policía constituye el eslabón más débil del conjunto de instituciones incluidas en las estrategias anti-narcóticos. En todos los países, parece que las fuerzas armadas son menos infiltradas por el crimen. Con la excepción de la institución armada en Honduras, las fuerzas armadas no son un actor político, que ambicione participar en la política, en ningún otro país latinoamericano ni caribeño.

Guatemala es el país cuyo gobierno nacional decidió – a mediados de la primera década del siglo XXI – que las instituciones de seguridad y el sistema judicial eran tan frágiles y vulnerables que el país necesitaba una comisión internacional, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) para supervisar el funcionamiento de estas imprescindibles instituciones. Ningún otro gobierno ha sentido la necesidad de solicitar este tipo de apoyo/supervisión internacional.

También sostengo que las tesis sobre la 'captura del Estado' por el crimen organizado no se basan sobre estudios empíricos fuertes. En este estudio, hago la comparación con las organizaciones anteriores de la guerrilla y las estrategias de contrainsurgencia que prevalecían en América Latina entre los sesenta y finales de los ochenta. Las estrategias anti-drogas actuales en la región tienen algún parecido con la estrategia y tácticas más o menos clásicas de la contrainsurgencia durante las campañas anti-guerrilla, que las dictaduras militares solían diseñar y ejecutar.

Por supuesto que también hay diferencias fundamentales: anteriormente, los movimientos guerrilleros eran organizaciones político-militares cuya ideología pretendía explícitamente derrocar a las dictaduras y establecer un gobierno más democrático y socialista. Las organizaciones criminales, en la actualidad, más que político-militares, son organizaciones económico-militares, que no pretenden derrocar al gobierno sino lograr un excedente económico ininterrumpido y de fáciles ganancias, mediante la violencia y la corrupción, o bien por las buenas (corrompiendo a las autoridades) o por las malas (con las armas y las pandillas). Su estrategia es controlar los territorios o corredores comerciales que abren el espacio para la producción y el tráfico que garantizan el lucro ininterrumpido. Su objetivo máximo es el excedente, la 'buena vida' y la perspectiva de incorporarse en los segmentos de la élite social y política.

Definir la 'captura del Estado' como objetivo máximo tiende a ocultar los perversos efectos que tiene el crimen organizado: la corrupción a largo plazo de las instituciones clave de la ley y el orden y un estado semi-permanente de impunidad e inmunidad con respecto a las funciones policíacas:

- La impunidad tiene el efecto duradero de des-legitimar la seguridad nacional, el sistema jurídico y penitenciario, proceso que también arrastra, como una avalancha, a los partidos políticos y movimientos sociales.
- Un segundo efecto negativo es el fenómeno de la infiltración generalizada, a nivel local y regional, de los partidos políticos y representantes políticos. En Brasil, Colombia, Guatemala, México y otros países, corrupción e intimidación de los políticos 'domesticados' se le ha llamado irónicamente como sistema de 'para-política' o 'para-políticos'.
- Un tercer efecto negativo es el deterioro de la reputación de los políticos locales. Los presidentes populistas, desde Menem en Argentina hasta Fujimori en Perú, han utilizado el estereotipo de los magistrados y políticos fáciles de corromper para lanzarse como los 'verdaderos defensores de los pobres' contra el parlamento y las cortes.
- Un cuarto efecto negativo es la confusión entre las organizaciones criminales a ultranza, las que se imponen con sus propias fuerzas militares o paramilitares, y las agrupaciones 'normales' pero mucho más visibles de pandillas o maras criminales juveniles, en América Central y varias áreas metropolitanas en América Latina y el Caribe. En América Central esto ha producido campañas presidenciales de "mano dura" (tolerancia cero) – pero no para hallar la solución del crimen organizado, sino para eliminar o encarcelar a los integrantes más visibles (y tatuados) de las maras.

Estoy convencido de que, en particular, los partidos políticos tienen que asumir la responsabilidad de agendas adecuadas de seguridad. Sin embargo, en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, los políticos se inclinan por delegar esta agenda tan importante a 'expertos': ex generales y comandantes de fuerzas policiales especializadas. Una de las recomendaciones a las organizaciones donantes como el NIMD es proporcionar los elementos de estudio para ayudar a diseñar agendas integrales de seguridad, incluyendo las políticas respectivas, y hacerlas accesibles para los partidos políticos y la sociedad civil en general.

El Problema Hace 25 Años

El Análisis del Problema por Pablo Escobar

Esta anécdota no es oficial, ni mucho menos, y puede ser totalmente apócrifa. Las instituciones de seguridad nicaragüenses y cubanas documentaron las relaciones entre Pablo Escobar-Gaviria, entonces jefe del cartel de Medellín, y un grupo de trabajo dirigido por Oliver North que financió las fuerzas de contrainsurgencia ("contras") establecidas en Honduras y Costa Rica.

También puede que Escobar también tratara de contactar con el Gobierno de Ortega sobre la comodidad de una ruta de narcotráfico cruzando por la Nicaragua Sandinista. El plan no se concretó porque los nueve comandantes de la Dirección General no quisieron involucrarse con el dinero de las drogas. Si la anécdota es cierta, da una impresión interesante de la magnitud del problema hace unos veinticinco años. Entre tanto, la situación sólo ha empeorado.

Hubo tres argumentos que Pablo Escobar puso sobre el tapete. Primeramente, él preguntó: ¿Alguien me puede explicar cuáles son los límites que diferencian a la DEA/CIA de nosotros, pobres contrabandistas? Ellos venden drogas para financiar al ejército de los Contras en Honduras. Nosotros hacemos lo propio, para enriquecernos. ¿Cuál es la diferencia?

Después comentó que el negocio de las drogas no era minorista. Por el contrario, dijo, las drogas ingresan a los puertos del mundo por contenedores. Implica la cooperación de muchos funcionarios en los países compradores.

Su tercer comentario fue sobre el blanqueo de dinero. 'Estamos apoyando fuertemente a la economía estadounidense', se jactó. 'Sólo el año pasado, inyectamos los ingresos de 150 toneladas de coca en su sistema bancario, mediante el lavado del dinero'.

El Crimen Organizado en América Latina⁴

La agenda de desarrollo y seguridad en América Latina ha sufrido cambios durante los últimos cincuenta años. Entre la década de los sesenta y mediados de los ochenta, la prioridad más acuciante era la agenda de re-democratización y la transformación de los regímenes militares en gobiernos democráticos. Cuando volvió la democracia, la acompañó una de las crisis económicas más severas que habían afectado a la región desde su independencia de España y Portugal. Entonces, la inquietud más urgente era la gestión de los programas de ajuste estructural y las estrategias para reducir la pobreza.

Transformación de regímenes militares en gobiernos democráticos

En la actualidad, la democracia y el desarrollo se ven amenazados por la violencia estructural. Esta vez no es cuestión de la represión por un gobierno militar o la guerra de “baja intensidad”, con campañas contrainsurgentes contra los movimientos guerrilleros. En la actualidad, el crimen organizado, y especialmente los perpetradores de violencia directamente relacionados con las drogas y sus carteles son la mayor competencia del Estado, de su sistema de seguridad y de las instituciones reguladoras de la ley y el orden, la prosperidad y la paz.⁵ En esta situación, el efecto corruptor en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad (la institución armada: fuerzas armadas y policía), el poder judicial y el sistema penitenciario es uno de los puntos más destacados que hay que considerar.

El crimen organizado es la mayor competencia del Estado

Varios países de la región parecen estar en guerra contra sí mismos. Colombia, ya sesenta años inmerso en sucesivos ciclos de conflicto armado, es el país del mundo del que han escapado el mayor número de refugiados (tres millones), tiene el segundo mayor número de soldados menores de edad, hace campañas militares contra fuerzas guerrilleras y paramilitares muy potentes, tiene al menos cincuenta grupos criminales de batalla que funcionan de manera más o menos independientemente a gran escala, y es el territorio donde se puede reclutar con más éxito a sicarios.⁶ México se ve gravemente afectado por los conflictos armados entre los propios carteles de la droga y entre los carteles y las fuerzas de seguridad. Entre diciembre del 2006 y julio del 2010, los conflictos ocasionaron más de 28.000 víctimas.⁷ Las fuerzas armadas y la policía se dedican a operaciones para recuperar el control sobre varios Estados de la Federación Mexicana. El Triángulo Norte de América Central – El Salvador, Honduras y Guatemala – es el escenario tanto de narco-guerras a nivel nacional como de pandillas juveniles que se disputan el control sobre mini-territorios.⁸ En estos tres países, las fuerzas armadas están sustituyendo a la policía en sus tareas de seguridad interna.

Muchos países de la región parecen estar enfrascados en una guerra interna

⁴ Los datos de fuerza militar que utilizo aquí son los publicados por RESDAL (2010).

⁵ Garson (2008).

⁶ Thoumy (2010: 4).

⁷ Véase Benítez (2010a) y Benítez y Rodríguez Luna (2010) para más detalles.

⁸ Acevedo (2008), Cruz y Portillo (1998), FRIDE (2007), Gutiérrez Rivera (2009), Martínez Ventura (2010), Savenije (2009) y UNODC (2007).

Las organizaciones criminales como el *Comando Vermelho* y las pandillas rivales posteriores con niños soldados, como el *Terceiro Comando* y *los Amigos dos Amigos* afloraron a mediados de los ochenta y noventa como 'potencias paralelas' en las favelas de Rio de Janeiro.⁹ En Sao Paulo, el *Primeiro Comando da Capital* (PCC), empleando un discurso de izquierda, ha desafiado en repetidas veces a las autoridades estatales y federales.¹⁰ Venezuela urbana se ha vuelto propensa a la violencia, entre otras razones por el uso generalizado de drogas en los barrios populares.¹¹ Incluso los Estados Isleños del Caribe sufren graves amenazas por las pandillas juveniles y el crimen organizado.¹² La insurgencia, criminalidad, violencia y corrupción a gran escala contribuyen directamente a la desestabilización nacional. Una variada gama de actores opera en la economía ilegal.

No obstante, de todo el crimen organizado, el sector de las drogas y especialmente la producción y el tráfico de cocaína y – en menor grado – de la heroína es el segmento más importante en términos de volumen, la generación de ingresos e impacto en la sociedad de todos los posibles perpetradores de crímenes a escala mundial.¹³ Al mismo tiempo, los carteles de drogas y grupos mafiosos tienden a regular y controlar todos los demás ámbitos del crimen organizado, como el transporte clandestino de emigrantes, el tráfico de mujeres y menores, el comercio ilegal de maderas tropicales, diamantes, esmeraldas y marfil, así como el contrabando en armas ligeras.

De todo el crimen organizado, la industria de la droga es el segmento más importante

⁹ Arias (2006), Cruz Neto et al. (2003), Dowdney (2003), Zaluar (2004) y Zaluar y Alvito (2006).

¹⁰ Souza (2007).

¹¹ Briceño-León (2008), Jácome (2008, 2010) y Mayorca (2010).

¹² Bobsa (2009a, 2009b, 2010).

¹³ UNODC (2010f: 3 – 5) y UNODC (2010g).

Datos sobre las Drogas, los Ingresos y las Rutas del Tráfico

El cultivo de la coca se centra básicamente en tres países andinos: Colombia, Perú y Bolivia, en ese orden. Tradicionalmente, se exporta hacia los mercados de los EEUU y Europa. Sin embargo, los efectos del tráfico en los países de transición en América Latina han generado nuevos mercados internos para el consumo de drogas en las aglomeraciones metropolitanas y urbanas de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, América Central y México. Recientemente, en Argentina y Chile el consumo de la coca ha alcanzado un volumen comparable con el de los EEUU.¹⁴ Además, en los países del Caribe y las Guayanas, en la República Dominicana, Haití, Jamaica, las Antillas Neerlandesas y Surinam, han surgido mercados internos de consumo.

Nuevos mercados internos para el consumo de droga

Sin embargo, el resultado más dramático, tanto en los países productores como los de transición en América Latina y el Caribe, es la explosión de la violencia e inestabilidad política.¹⁵ La violencia e inestabilidad política también son características de los países del oeste y sur de África involucrados en el sistema del tráfico hacia Europa.

Explosión de violencia e inestabilidad política

Producción

En Colombia se percibe una reducción gradual del cultivo de la coca y la producción de cocaína desde el 2000. El país sigue siendo el mayor productor del mundo (68.000 ha. en el 2009). La producción peruana crece desde el 2007 (59.000 ha. en el 2009). Bolivia también incrementó su producción de coca y tuvo cultivos de 30.900 ha. en el 2009. Ecuador, el cuarto país andino, también produce coca, pero el monto es relativamente insignificante.¹⁶

Analistas de varios países tienen sus dudas sobre las estadísticas del cultivo, el procesamiento, la transformación de pasta en cocaína, el volumen de exportaciones (ilícitas) y el volumen de importaciones (ilícitas) en los países de consumo, en particular los EEUU y la UE.¹⁷ Sin embargo, el consenso es que se ubican los países productores de coca en este orden: primero Colombia, y luego Perú, Bolivia y Ecuador. Hay, no obstante, cálculos aproximados de una producción muy similar entre Colombia y Perú. La producción máxima (en términos de ha. en cultivo) fue, para Colombia, 163.000 ha. en 2000; para Perú 108.600 ha. en 1995; y para Bolivia 48.100 ha. en los 1980.¹⁸

Colombia es el mayor productor de coca, seguido de Perú, Bolivia y Ecuador

Niveles de violencia

El panorama de violencia varía considerablemente de un país a otro; los niveles de violencia en los tres países productores son muy diferentes. En Colombia

¹⁴ UNODC (2010a: 178-179).

¹⁵ Colectivo Maloka (2009), Thouri (2003) y Vellinga (2004).

¹⁶ UNODC (2010a: 161-162). Véanse también los informes nacionales más detallados de la UNODC (UNODC 2010b, 2010c, 2010d y 2010e).

¹⁷ Véase Vargas (2010) para un análisis de los datos de la UNODC, las estadísticas publicadas por los organismos estadounidenses y las cifras de la policía colombiana.

¹⁸ Estadísticas elaboradas por Salazar Ortuño (2009: 312) en base a los datos del Secretario de Estado y UNODC.

Los niveles de violencia en los tres países productores varían

se libra la 'guerra contra las drogas' con fuerte asistencia estadounidense. La producción y tráfico de cocaína se considera un acto criminal y de su proceso se encargan las fuerzas policiales especiales, apoyadas por las fuerzas armadas. El cultivo de la hoja de coca está estrictamente prohibido y se considera que todo productor de coca está involucrado en actividades criminales.

En el Perú, el cultivo de la coca se 'tolera'; al menos no se penaliza. Incluso hay una asociación de cocaleros (campesinos que cultivan coca) y hace varios años dos de sus miembros fueron elegidos como miembros del Parlamento. En Bolivia, el Presidente del país es, simultáneamente, Presidente de la Federación de Cocaleros en la región de coca más importante del país, el Chapare (cerca de Cochabamba). El cultivo de la coca para consumo doméstico y la transformación industrial es legal en dos regiones del país (hasta un máximo legal de 20.000 ha.). El nivel de violencia directamente asociada con el cultivo de la coca es extremadamente alto en Colombia, asombrosamente moderado en Perú, y considerablemente bajo en Bolivia.

Fijación de Precios

Los precios se establecen según tres factores:

- El proceso no tan costoso de transformación local de la hoja de coca en pasta de coca y de ahí en cocaína (una innovación reciente a nivel nacional es el uso de procedimientos que reducen los tiempos y costos, utilizando hornos de microondas, lo que duplica la cantidad de cocaína extraída).
- La pureza de la cocaína y
- El circuito de trasbordo y transporte

Se ha establecido que el precio de un kilogramo de cocaína pura en Perú, que es el menos costoso de los productores, está entre 900 y 1000 \$ USA (precios a mediados del 2010). El precio de mercado en los mercados de consumo en los EEUU y Europa está en unos 22.000 \$ USA por kilo de cocaína adulterada de mucha menor calidad.

Rutas del Tráfico

En estos últimos años, se ha recopilado más información sobre las rutas del narcotráfico y las alianzas entre los varios segmentos del crimen organizado. Hay consenso en las investigaciones sobre las rutas desde Colombia hacia los Estados Unidos y las rutas de transición hacia la Unión Europea.¹⁹

Hay rutas terrestres, marítimas y aéreas de transporte hacia los EEUU. Originalmente, la mayoría de la cocaína colombiana se transportaba cruzando el Caribe hasta los EEUU en barcos pesqueros, pequeños yates y avionetas. Cuando las fuerzas navales y de guardacostas norteamericanas y mexicanas lograron un bloqueo relativamente eficaz, se modificaron las rutas del transporte, adoptándose rutas terrestres por América Central y México. El transporte marítimo se revolucionó de pequeñas embarcaciones a yates de alta velocidad e incluso submarinos, líneas comerciales de transporte marítimo y aéreo, y avionetas. Estas rutas implican enlaces entre los carteles y las mafias.

Tráfico por tierra, mar y aire

¹⁹ Datos presentados en *Trafficking and Transnational Crime* (2010) y Benítez y Rodríguez Luna (2010) fueron utilizados para la ruta Colombia – EEUU. Bagley y Hernández (2010) y Brömbacher (2010) proporcionaron datos sobre las rutas entre Sudamérica y Europa.

FIGURA 1

La producción de cocaína de hoy¹⁶

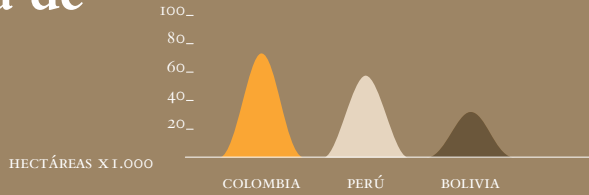


FIGURA 2

El máximo de producción de cocaína¹⁸

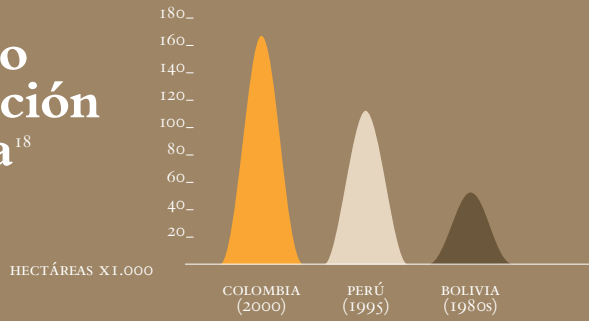
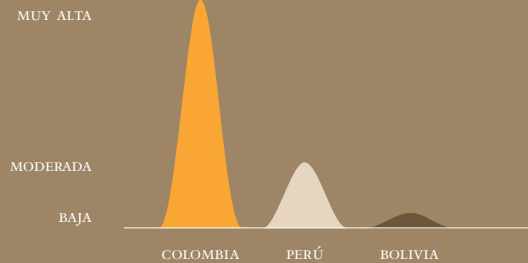


FIGURA 3

Niveles de violencia



¹⁶ UNODC (2010a: 161-162). Véanse también los informes nacionales más detallados de la UNODC (UNODC 2010b, 2010c, 2010d y 2010e).

¹⁸ Estadísticas elaboradas por Salazar Ortuño (2009: 312) en base a los datos del Secretario de Estado y UNODC.

Cuadro 1

Enlaces Transnacionales entre los Carteles de México y América Central y otros Países (Narcotráfico entre Colombia y los EEUU)

Carteles mexicanos	América Central y otros países
Federación Sinaloa	Guatemala, Nicaragua, Panamá
Golfo	Guatemala, Honduras
Tijuana	América Central
Juárez	Nicaragua, Ecuador
Beltrán Leyva	América Central, Venezuela

Fuente: *Trafficking and Transnational Crime* (2010), Benítez (2010c) y Benítez y Rodríguez Luna (2010)

Rutas hacia los EEUU

Durante los 'años fáciles' de los grandes carteles colombianos de Medellín y Cali, las alianzas se fundamentaban en la confianza personal y las redes informales. Después de la desintegración de los mega-carteles colombianos en los años 90, surgieron unos 250 a 300 mini-carteles en Colombia. En México, dos grandes carteles se hicieron cargo de parte de la ruta del transporte hacia los EEUU y monopolizaron el comercio mexicano de drogas hasta fines de los 90. A principios del nuevo siglo, se formaron nuevos carteles. En los últimos diez años, se libró una guerra entre los carteles, y seis carteles grandes se entablaron en duros enfrentamientos con violencia extrema. Las guerras entre los carteles se intensificaron con grandes suministros de armas, adquiridas en los EEUU, y por la nueva política del Gobierno mexicano (formulada por el Presidente Fox) de un enfrentamiento severo con los carteles.

Cuadro 2

Alianzas transnacional entre los carteles colombianos, grupos guerrilleros y el crimen organizado de México en la ruta a EEUU (y algunos países Europeos)

Carteles mexicanos	Alianzas Colombo-Mexicanas	Área de Influencia
Sinaloa federation	Los Paisas, los Urabeños, los Rastrojos, frentes 10, 16, 27, 48 Familia Michoacana	México, EEUU (80 ciudades), 7 países centroamericanos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay
Golfo- Zetas	ERPAC, los Paisas, los Urabeños, frentes 10, 16, 27, 48 Cartel de Tijuana, de Juárez, los Beltrán Leyva	México, EEUU (43 ciudades), 7 países centroamericanos, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay Italia, España
Tijuana	ERPAC, los Paisas, los Urabeños, frentes 10, 16, 27, 48 Cartel de Golfo-Zetas, de Tijuana, los Beltrán Leyva	México, EEUU (17 ciudades), Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia
Juárez	ERPAC, los Paisas, los Rastrojos, frentes 10, 16, 27 Cartel de Golfo-Zetas, de Tijuana, los Beltrán Leyva	México, EEUU (El Paso), Colombia, Argentina
La Familia	Federación Sinaloa	México, EEUU (Chicago)
Beltrán Leyva	Frentes 10, 16, 27 Cartel de Golfo-Zetas, de Juárez, de Tijuana	

Fuente: *Trafficking and Transnational Crime* (2010), Benítez (2010c) y Benítez y Rodríguez Luna (2010)

La penetración de los carteles mexicanos en El Salvador, Honduras y Guatemala desencadenó un segundo conflicto entre carteles en el llamado Triángulo Norte de América Central. A pesar de estos conflictos entre carteles, la necesidad de establecer un suministro ininterrumpido de drogas para los mercados norteamericanos de consumo también favoreció la concreción de alianzas más o menos estables dentro de las cadenas transnacionales de producción y transporte. Las consiguientes alianzas se resumen en las Figuras 1 y 2.

Rutas hacia los Mercados Europeos

Hay tres rutas principales hacia Europa. La primera es por el Caribe hacia España y Portugal y/o por los puertos de ciudades sudamericanas en el Atlántico hacia los dos países ibéricos y otros países europeos (la ruta norteña). Otra ruta (la sureña) pasa por Venezuela, Brasil y Argentina, hacia África y luego Europa. Las ex colonias del Caribe y las Guayanas también sirven como cadenas de entrega hacia su antigua madre patria: Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos.

Los datos sobre las rutas de drogas hacia Europa son algo menos precisos. La cocaína colombiana y peruana se transporta por trasbordo terrestre hacia el norte y rutas aéreas, empleando las zonas costeras de Venezuela y Brasil y las Guayanas, así como los Estados Isleños del Caribe y las Antillas. La cocaína peruana y boliviana se transporta por una ruta más sureña, aprovechando los puertos marítimos y aeropuertos brasileños y argentinos y haciendo trasbordo directamente hacia el mercado europeo de consumo o a través de los países del oeste y sur de África. México y América Central no cumplen un rol significativo. La mayoría de las drogas con destino final en Europa llegan a los países ibéricos o a los principales puertos europeos como Róterdam, Amberes, Dover, y Nápoles. Turquía es un nuevo destino de trasbordo. En la Figura 3, se presentan estas rutas en un esquema con sus vínculos.

Cuadro 3

Los enlaces transnacional entre los países andinos (productores) y los países de América latina/África/Europa (mercados de consumo)

Países andinos	Países intermediarios (en América Latina y el Caribe)	Países intermedarios (en África)	Países europeos
Colombia y Perú	Venezuela, Brasil, países del Caribe y las Antillas, las tres Guayanas	África Mediterránea del Norte, África Occidental Central, África Austral (también Cabo Verde, las Azores, las Canarias)	Europa Occidental y del Norte, España y Portugal, Turquía
Perú y Bolivia	Brasil y Argentina (Chile es país de consumo)	Países del África Occidental Central, África Austral (también Cabo Verde, las Azores, las Canarias)	Europa Occidental, España y Portugal

Fuente: *Trafficking and Transnational Crime* (2010) y Mathieu y Niño Guarnizo (2010)

FIGURA 4

Las rutas del tráfico

1998

18



FUENTE: UNODC WORLD DRUG REPORT, 2010
<http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2010.html>

2008



México

A pesar de su alarmante nivel de violencia, México es un Estado federal con instituciones públicas que funcionan bien a nivel nacional. Después de la Revolución Mexicana en las primeras décadas del siglo XX, se estableció un Estado unipartidista que primeramente desarmó a los ejércitos campesinos, para luego enfocarse en reformas sociales – especialmente durante los años 1930 bajo el Presidente Lázaro Cárdenas – y entonces crearon una economía liderada por el Estado, con crecimiento económico durante largas décadas, acompañado de estabilidad social y política, mediante la cooptación y el control.

Alarmante nivel de violencia pero instituciones públicas que funcionan bien

El brote de violencia es un fenómeno de la última década. Sin embargo, así como en el caso colombiano, México no es de ninguna manera un Estado fallido. En la mayoría de sus ciudades y Estados, las instituciones públicas y las organizaciones del Estado y la sociedad civil funcionan bien. El sector público mexicano es competente. La subordinación de las fuerzas de seguridad (las fuerzas armadas y la policía) a la autoridad civil se acepta sin ninguna duda. Las fuerzas armadas no participan en la política. A nivel nacional, el poder judicial es independiente. En las regiones centrales del país, está ausente la violencia. Sin embargo, la fragilidad estatal y violencia salvaje están presentes a nivel municipal y regional en las zonas y regiones de tráfico y transporte de drogas.

México no es en absoluto un estado fallido

La 'Guerra a las Drogas' y la Iniciativa Mérida

Los problemas con las drogas y las políticas anti-drogas en México han generado un inmenso problema de seguridad interna.²⁰ Cuando en el 2000, bajo la presidencia de Fox, se formuló una nueva política de seguridad nacional, se solicitó a los EEUU (y se concedió) un programa sustancial de apoyo, el Plan o Iniciativa Mérida. La renovada política mexicana de seguridad nacional (formulada por el Presidente Calderón en el 2006) implica una 'guerra' contra el crimen organizado y en particular contra los carteles de la droga, una 'guerra contra las drogas'.

Apoyo de EEUU en la guerra contra el crimen

El Plan (Iniciativa) Mérida es un programa de apoyo estadounidense en el contexto de la política exterior de ese país.²¹ Se deriva y es coherente con los objetivos de la estrategia nacional de los EEUU en su guerra contra las drogas: control de producción y transporte extraterritorial de los narcóticos, programas de erradicación y la prohibición del consumo interno. Ya en 1989 los EEUU y México firmaron un acuerdo en el que reconocían su responsabilidad mutua para confrontar los problemas de las drogas. En el 2002 se firmó un nuevo acuerdo más extenso sobre las 'fronteras inteligentes'. Dispuso la armonización de la comunicación fronteriza. Reguló los flujos migratorios. Y facilitó el

²⁰ Para más detalles, véase Benítez Manaut (2010c, 2010d) y Benítez Manaut, Rodríguez Sumano y Rodríguez Luna (2009). Véase también Flores Pérez (2009), Krakau (2009) y Selee y Peschard (2010). También consulté un manuscrito inédito por Menno Vellinga y su estudio general publicado como Vellinga (2004).

²¹ Aquí sigo la contribución de Rodríguez Luna (2010).

intercambio mutuo de inteligencia y la entrega de instrumentos de avanzadas tecnologías para el control fronterizo y prácticas administrativas.

En el 2006, el Presidente Calderón declaró la guerra contra las drogas como prioridad nacional, subrayando la necesidad de 'recuperación territorial' por las fuerzas armadas y la policía, mejorando la inteligencia y las instituciones de seguridad. En el 2007, se ratificaron los acuerdos formales de la Iniciativa Mérida, extendiendo su alcance también a América Central, Haití y la República Dominicana. México también coopera bilateralmente con sus vecinos al sur, Guatemala y Belice. Hay grupos de trabajo sobre el intercambio de inteligencia y sobre la vigilancia fronteriza y la coordinación judicial, especialmente con respecto al tráfico de armas y los cruces ilegales de las fronteras.

Cooperación regional en la guerra contra el crimen

Los Carteles Grandes y los Más Pequeños

Los carteles mexicanos surgieron como consecuencia de la consolidación de un mercado creciente de consumo de marihuana y heroína en los EEUU después de la Segunda Guerra Mundial. En el Estado de Sinaloa, región productora de estas dos drogas, se formó un cartel como simbiosis entre los narco-productores y otras actividades comerciales y empresariales. El cartel se toleró tácitamente hasta los 70. La presión externa de los EEUU, asesinatos espectaculares en Guadalajara y el descubrimiento de la corrupción y participación a gran escala de la policía y las fuerzas armadas provocó que el Gobierno Federal implantara una política de intento de control.

La desintegración de los carteles colombianos de Cali y Medellín (véase el capítulo Colombia) y los efectos del Plan Colombia en el bloqueo de la ruta de transporte por el Caribe provocaron que los carteles mexicanos controlaran nuevas rutas de transporte a través de América Central y México hacia los EEUU. La destrucción de los carteles colombianos preparó el camino para el surgimiento de seis poderosos carteles mexicanos:

- El cartel de Sinaloa. El cartel tiene una gran influencia en los Estados de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Jalisco.
- El cartel del Golfo con los Zetas (reclutados de una guardia gubernamental de élite) como brazo armado, para hacer cumplir sus órdenes. El cartel controla la ruta Guatemala-México hasta Tamaulipas y Texas.
- La organización Beltrán Leyva, que se separó del cartel de Sinaloa.
- El cartel de Juárez.
- El cartel de Tijuana, y
- La Familia Michoacana.

Seis poderosos carteles mexicanos

Estos carteles, que operan a gran escala, originalmente se basaban en las lealtades en grandes familias y dependían de los clanes familiares interrelacionados, asociados con las élites regionales. Sin embargo, se dio un proceso de 'modernización' y los carteles actuales son organizaciones mucho más ágiles con cuadros de planificación y ejecución, reclutamiento, políticas de personal, logística, blanqueo de dinero, y 'relaciones internacionales' (también diplomacia y negociaciones con los carteles competidores y el crimen organizado en otros países). Adicionalmente, se han formado unos 130 cartelitos (mini-carteles) durante los últimos años.

Modernización de los carteles

Las brutales guerras entre los carteles y la violencia empleada en las rutas y los territorios controlados por los carteles detonaron una explosión de asesinatos. Surgieron “mini-guerras” a nivel local y regional entre los carteles y entre las instituciones mexicanas de seguridad y el crimen organizado. Las organizaciones del crimen organizado se tomaron el control (parcial) de las importantes ciudades del norte de México como Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros, Culiacán y Nuevo Laredo. En estas regiones y municipalidades ‘ocupadas’, se transformaban el gobierno local y especialmente la policía en instituciones que operaban controladas por el liderazgo de la mafia local.

Las guerras entre carteles desencadenaron una explosión de asesinatos

La fragilidad de México se puede medir por el cálculo aproximado federal de que el crimen organizado tiene presencia y/o influencia en un 50% de las municipalidades.²² En muchísimos municipios rurales, los carteles y organizaciones criminales relacionadas han financiado sus campañas electorales locales. En la última década, este proceso se reprodujo a nivel de Estado e incluso en algunos casos a nivel federal (altos funcionarios del ejército y la policía, y gobernadores y políticos de los Estados). La terminología mexicana para este fenómeno nacional es la “Narco-política”.

El crimen organizado está presente y/o influye en un 50% de los municipios

Drogas y las Instituciones Clave

La infiltración en las instituciones cruciales políticas y de seguridad se acompaña de la infiltración en las dependencias estatales y municipales de las instituciones federales: la policía y la inteligencia local, por ejemplo. Especialmente en Michoacán pero también en otros Estados, las organizaciones y redes dentro de sociedad civil son controladas por el crimen organizado. *La Familia* ha establecido redes de protección civil, trocando la protección por los servicios y forzando el apoyo y la lealtad. Incluso las instituciones religiosas locales se ven afectadas.

Las tácticas aplican el enfoque de “la zanahoria y el palo”: Gestos tipo Robin Hood, combinados con terror y temor. Las actividades tipo Robin Hood incluyen subsidios para la gente pobre de la localidad, proyectos locales de desarrollo (vivienda, saneamiento, atención a la salud pública, infraestructura educativa y apoyo para las organizaciones religiosas locales). El “palo” implica todo un arsenal de intimidación y ejecuciones, en su mayoría de autoridades locales poco colaboradores y líderes locales de barrio, asesinando o haciendo desaparecer a quienes protesten o se supone que sean adversarios, secuestrando a sus familiares y extorsionando a empresarios. Los narco-ingresos se complementan con el tráfico en armas ligeras y con actividades comerciales que incluyen piratería de CDs, DVDs, vídeos, etc.

El enfoque de la zanahoria y el palo: Acciones a lo Robin Hood acompañadas de terror y miedo

Se está desarrollando una especie de ideología pro-cartel mediante populares narco-canciones y narco-videos. Se silencia a los periodistas a nivel federal y seccional. La auto-censura se generaliza entre reporteros de radio y televisión y sus colegas de la prensa escrita. Algunos reporteros están publicando con seudónimo o anónimamente. Se está imponiendo una cultura de silencio y los periodistas emplean términos como el “narco-totalitarismo”.²³ Los observadores asumen que, en las municipalidades y Estados donde haya una presencia marcada de los carteles y las organizaciones criminales, los funcionarios locales se han involucrado en ‘pactos’, eufemismo para la corrupción sistemática y

Narco-totalitarismo

²² En documentos internos de políticas; véase Benítez Manaut (2010c:12).

²³ Véase por ejemplo los números mensuales de *Proceso* de 12 diciembre 2010 y 16 enero 2011.

negligencia conveniente. A nivel federal, parece que las instituciones esenciales (fuerzas de seguridad, justicia, inteligencia, aduanas y migración) están mucho menos infiltradas.²⁴

FIGURA 5

Las personas involucradas²⁵



FIGURA 6

La violencia anual

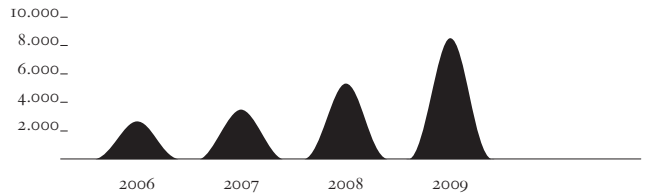


FIGURA 7

La violencia entre 2006-2009



Alrededor de 150.000 personas están directamente involucradas en las narco-actividades; 500.000 mexicanos se ganan la vida en sectores relacionados con las drogas. Los documentos oficiales ofrecen un cálculo aproximado de 20.000 a 23.000 jóvenes armados funcionando en las 'alas paramilitares' de los carteles.²⁵ La violencia reportada, en términos de la violencia que involucra directamente a los narco-carteles, arrojó totales anuales de 2231 ejecuciones en el 2006, 2773 en el 2007, 5661 en el 2008 y 8255 en el 2009. De las 17.754 ejecuciones reportadas entre 2006 y 2009 (los datos reportados por otra fuente oficial) 16.144 fueron civiles, 1610 fueron funcionarios de las fuerzas de seguridad, en su mayoría policías municipales. Las muertes de personal de las fuerzas armadas ascendieron a 105.

²⁴ Esto también consta en los documentos publicados por Wikileaks sobre las cuestiones de seguridad y drogas en México.

²⁵ Los datos se citan en Benítez Manaut (2010c: 13-14, 23, 27-30). Los números totales difieren ligeramente porque las fuentes de los datos provienen de diferentes informes institucionales.

Sin embargo, la violencia se concentra en algunas de las ciudades más grandes: Ciudad Juárez (3227), Culiacán (1126) y Tijuana (1009). Éste es el caso también para la concentración en los Estados: El 60% de todas las ejecuciones tuvo lugar en cinco Estados: Chihuahua (4960), Sinaloa (2158), Guerrero (1372), Baja California (1278) y Michoacán (1278).

Políticas Anti-Drogas

Al definir sus políticas contra las drogas, el Gobierno Federal optó en 2003-2004 por una ampliación del rol militar, un potente refuerzo y ampliación de las capacidades de la policía y del sistema de inteligencia.²⁶ El principal objetivo es 'recuperar' el control y la presencia del Estado en los territorios afectados. La asistencia militar en las operaciones contra el crimen organizado y específicamente las drogas ya era una práctica consuetudinaria desde los 60 en las áreas rurales de México. Lo novedoso es que las fuerzas armadas están recibiendo tareas específicas en las operaciones de recuperación en las zonas urbanas en el norte de México.²⁷ En la actualidad, un 50% del personal del ejército está directamente implicado en medidas anti-drogas a diario.²⁸ Las políticas de "recuperación" están diseñadas como una estrategia contra el crimen organizado, y no contra las pandillas juveniles (maras) como en América Central. En las zonas urbanas de México, esta categoría de actores armados no estatales es de relativamente poca importancia.

La policía nacional cuenta con 425.000 efectivos, pero a nivel organizacional está fragmentada, administrada por tres jerarquías (federal, estatal, y municipal). Un factor que lo complica es la existencia de unas 9000 organizaciones diferentes policiales, entre las cuales los contactos operativos y los flujos de información no son, por decirlo amablemente, tan suaves como deberían. Las organizaciones de seguridad privada comprenden 150.000 personas. Muchos de los guardias de seguridad privada fueron policías, y fueron despedidos por sus delitos. Las fuerzas armadas (ejército y fuerza aérea) cuentan con 200.000 miembros, entre oficiales y tropa, y la marina nacional tiene 50.000. El paquete de apoyo de los EEUU (la Iniciativa Mérida) hizo de México el país más favorecido en lugar de Colombia. En el 2008, México recibió 400 millones \$ USA y Colombia 395 millones \$ USA; en el 2009 la ayuda de los EEUU a México ascendió a 672 millones \$ USA mientras que para Colombia fueron 400 millones \$ USA.

En los primeros tres años de la presidencia de Calderón, se capturó a 67.742 miembros de la narco-industria. De éstos, 16.511 estaban afiliados al cartel de Sinaloa, 16.354 de la alianza Golfo-Zetas, 11.930 del cartel de Juárez, 8.850 del grupo Beltrán Leyva, 8.744 del cartel de Tijuana, y 1321 de la Familia Michoacana. Además, se arrestó a 618 funcionarios corruptos del sector público con conexiones comprobadas con la narco-economía. 16.923 supuestos miembros de carteles murieron en confrontaciones con las fuerzas de seguridad en estos tres años: un 12% jefes locales, un 17% operadores de narco-células, y un 71% pequeños narco-minoristas.

Ciudades y Regiones fallidas

Sin embargo, sería engañoso cantar victoria. El crimen organizado puede continuar reclutando y actualmente amenaza a algunas de las ciudades mayores de México: Monterrey, la tercera ciudad de México, con 6 millones de habitantes y

Fuerzas armadas y antipolíticas

Fragmentación de la fuerza nacional de la policía, organizaciones de seguridad privada y las fuerzas armadas

En los primeros 3 años de Calderón, se capturaron 61.742 miembros de la narcoindustria

²⁶ El número de efectivos a principios del 2010 de las fuerzas armadas mexicanas fue de 260.500 (200.000 ejército, 52.000 armada y 7.500 fuerza aérea). México está en tercer lugar después del Brasil y Colombia.

²⁷ El ejército se hizo cargo de las tareas normales de la policía de la seguridad interna y asistencia civil en Ciudad Juárez durante varios meses. La presencia militar en Tijuana redujo el índice de homicidios en un 50%.

²⁸ Armada Terrenes (2010: 252).

El crimen organizado sigue siendo una amenaza en algunas de las grandes ciudades mexicanas

el centro industrial del norte de México, es un área disputada y nuevo panorama de batallas urbanas, donde al menos diez organizaciones criminales se disputan el control sobre un segmento de la metrópolis. Para evitar un mayor deterioro, la mayoría de las funciones de seguridad están traspasándose del nivel municipal y estatal al nivel federal. La ciudad de Matamoros, cerca de Nuevo Laredo, ya es una narco-ciudad desde los 90. Incluso los impuestos municipales y multas de tránsito se recaudan por parte de las 'nuevas autoridades'. Varias ciudades más grandes también están amenazadas o están siendo co-administradas por representantes del crimen organizado.

No un estado fallido pero sí hay ciudades y regiones fallidas

México no es de ninguna manera un Estado fracasado, pero sí tiene 'ciudades fallidas' y posiblemente algunas 'regiones perdidas'.²⁹ Ciudad Juárez es probablemente el ejemplo más explícito y el peor caso de una ciudad fracasada y el Estado de Chihuahua es un posible ejemplo de un Estado perdido dentro de la Federación Mexicana. En noviembre 2009, la Presidenta de los empresarios de la Asociación de la Zona de Comercio Libre de Ciudad Juárez hizo un llamado público a las Naciones Unidas para que enviara a un contingente de sus "casco azules", dado el nivel intolerable de violencia. También pidió una misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En 2009, se registraron 191 homicidios por cada 100.000 habitantes, el mayor nivel de América Latina.³⁰ El Gobierno Federal envió a 6.000 soldados y 2.000 policías federales adicionales como refuerzo.

La militarización del gobierno de la ciudad no consiguió los resultados que se esperaban

La militarización del gobierno municipal no produjo los resultados esperados. No hubo una clara reducción de los niveles extremadamente altos de violencia sino que, contra toda lógica, el manejo de la situación por los militares también demostró que el ejército también violaba los derechos humanos.³¹ El gobierno municipal tuvo que establecer una oficina de la Defensoría del Pueblo para las denuncias de los 'abusos por las autoridades federales'. La población de la ciudad se redujo de 1,3 millón a un millón de habitantes. Más de 100.000 familias son consideradas como personas desplazadas. En términos militares, la ciudad es una 'zona de guerra' donde la población está dedicada a actividades de guerra o de defensa. Ciudad Juárez es un ejemplo clásico de un 'vacío de gobierno', donde las autoridades legítimas están ausentes en gran medida y los poderes alternativos deciden sobre la ley y el orden.

México D.F. es un ejemplo de una posible solución

Por otro lado, Ciudad de México ilustra una posible solución. La megalópolis está administrada por el PRD (de izquierda), pero los dos otros partidos nacionales (PRI – centro, y PAN – derecha) se pusieron de acuerdo para una cooperación extensa en cuestiones de seguridad pública. La policía, las instituciones de justicia y el aparato de inteligencia están colaborando estrechamente. Se considera que la policía es competente y que el aparato de inteligencia es el mejor de México y se especializa en la prevención de los crímenes y la identificación oportuna de los miembros de las pandillas. Desde fines de los 90 se ha mantenido una política de tolerancia cero ("mano dura") para la criminalidad y violencia del orden público.

²⁹ Analizamos el concepto de las 'ciudades perdidas' en Koonings y Kruijt (2007, 2009).

³⁰ Como dato significativo, el segundo y tercer puesto lo ocupan las ciudades de San Pedro Sula (119 homicidios) en Honduras y San Salvador (91 homicidios), capital de El Salvador.

³¹ Meyer (2010).

Guatemala y el triángulo norte de América Central: El Salvador y Honduras

El triángulo norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras) probablemente es la región más afectada en términos de violencia, debilitamiento de las instituciones públicas e infiltración del crimen organizado en la economía, la sociedad y el sistema político. Con Nicaragua (que en muchos sentidos es la excepción) esta región fue, durante décadas, el escenario de dictaduras militares, represión y luchas civiles. De todos los países, Guatemala salió malherida de las décadas de dictadura y guerra civil, con un paisaje político fácilmente cambiante, con profundas lacras por las décadas de represión y extrema violencia, en su mayor parte iniciativas de maniobras militares de contrainsurgencia y las masacres sistemáticas perpetradas por las fuerzas paramilitares (indígenas).

La región más afectada por el crimen organizado

En el triángulo norte de América Central, la presencia generalizada de las pandillas juveniles criminales, las maras, tiende a encubrir el impacto del crimen organizado. La clara presencia de las maras y su práctica de extorsión a la gente pobre crea tanta preocupación y ansiedad que la población de los barrios urbanos populares y las comunidades rurales exigen encarecidamente que las autoridades tomen medidas represivas. Los programas de mano dura (represión y tolerancia cero) tienen atractivo electoral. A finales de los 90 y ahora después del 2000, muchos candidatos presidenciales y parlamentarios centroamericanos han bogado por agendas "anti-mara". Sin embargo, la consecuencia es que los políticos con mano dura dan prioridad en cuanto a seguridad a la persecución de criminales de poca monta. Esto también distrae la atención de fiscales, jueces y magistrados. Además, crea silencio y espacio libre para los miembros del mucho más despiadado crimen organizado.³²

La presencia general de bandas criminales de jóvenes suele confundir el impacto del crimen organizado

Guatemala

Los problemas de Guatemala con las drogas estuvieron encubiertos durante dos décadas por la guerra civil que afligía al país durante 36 años.³³ La mayoría de la historia documentada de la guerra analiza las horrendas consecuencias de las operaciones contrainsurgentes y la dictadura militar que transformó a Guatemala en un 'país cuartel'.³⁴ Es menos conocido que, a principios de los 80, cuando la guerra y la persecución a los 'comunistas' se tornaron más brutales, comenzó también a establecerse en Guatemala el crimen organizado con su tráfico en narcóticos. Durante la última etapa de la guerra, un segmento de las fuerzas armadas, preocupado por la menguante posibilidad de apoyar económicamente a las operaciones contrainsurgentes a gran escala, se dedicó a los negocios clandestinos, preparando el camino para que los 'simpáticos civiles' se dedicaran al contrabando y a la cooperación con las varias hampas criminales. Anteriormente, habían tratado de formar un partido político con

La guerra civil oculta los problemas con las drogas

³² A nivel regional, se suscribió un Tratado Marco de Seguridad en 1995 dentro del marco del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) para fortalecer y armonizar las políticas de seguridad en América Central.

³³ Consulté los estudios muy detallados por Briscoe (2008, 2009) y Briscoe y Pellecer (2010). Véase también Gavigan (2009), Loria Ramírez (2010), Rodríguez Pellecer (2010) y PNUD (2010).

³⁴ Aquí me refiero a los informes de las dos Comisiones de la Verdad (*Guatemala nunca más*, 1998, CEH, 1999). Véase también Krujif (2008).

civiles cooptados. Durante los largos años de la guerra, empresarios de confianza y gente con intereses políticos congeniaron con los comandantes militares y con los operativos dentro de la inteligencia militar.

'Fuerzas Oscuras' y los Orígenes del Crimen Organizado

Ya que los militares tenían control sobre la policía y estaban encargados directamente de las aduanas y la migración, fue una operación fácil y beneficiosa para ambas partes. El contrabando se volvió muy lucrativo. Se formaron redes de contrabando y grupos de grandes familias, beneficiándose de los favores de los militares. Una vez establecidos como empresarios mafiosos, se acostumbraron a la violencia e intimidación como su cultura comercial. Así como pasó en México, la desintegración de los narco-carteles colombianos (en particular los de Cali y Medellín) y los efectos del Plan Colombia produjeron un bloqueo de la ruta de transporte por el Caribe y preparó el camino para el establecimiento y consolidación de una serie de grupos locales de negocios clandestinos en Guatemala con fuertes lazos de parentesco y redes de grandes familias. Estos grupos comerciales operaban en las zonas de las costas Atlántica y Pacífica y en el Petén, la frontera selvática casi abierta con México.³⁵

Después de los acuerdos de paz y la paz definitiva en diciembre 1996 y como consecuencia imprevista de los recortes del presupuesto del ejército, una parte del personal que ya tenía sus vínculos con la anterior inteligencia militar y las fuerzas especiales (los Kaibiles) 'se pasó al sector privado'. Acomodaron e incluso integraron las redes consolidadas de tráfico de coca en sus anteriores grupos comerciales y sus redes posteriores, consolidando su mafia en tiempo de paz. En Guatemala, se llaman las 'fuerzas oscuras'.³⁶ Los ex-militares fueron especialmente útiles para facilitar el transporte. Durante las campañas de contrainsurgencia en los 80 y 90, las fuerzas armadas construyeron y arrendaron más de 300 pistas privadas de aterrizaje secretas en las propiedades de la clase terrateniente. Después de la guerra, los antiguos del servicio de inteligencia vincularon a los narco-grupos extranjeros y locales con los propietarios de estas pistas. Se pagaba el arriendo en efectivo, y después en dinero y en paquetes de cocaína para las redes minoristas.

Grupos del Crimen Organizado

Los grupos guatemaltecos que trafican en coca, aunque se dedicaban a operaciones sumamente lucrativas, nunca se hicieron tan poderosos y 'modernizados' como sus equivalentes mexicanos. Pero se tomaban su tajada de las rutas transnacionales para el transporte de coca (desde Colombia por América Central y México hasta los EEUU) e incluso intensificaron el cultivo de opio en San Marcos, el departamento en la frontera del Pacífico con México, actividad que se inició a mediados de los 80 pero se había triplicado en volumen para la primera década del 2000. En los últimos tres años, Guatemala sustituyó a Colombia como el segundo productor latinoamericano de opio (siendo México el primero).

Así como en el caso de México, los narco-grupos guatemaltecos tienen la fuerza armada y la violencia cruda como su cultura operativa. Las estadísticas de asesinatos relacionados con los narco-negocios se incrementaron entre 2000 y 2010 desde unos 2.000 hasta 6.000 anuales. Así como en México, los carteles usan tácticas de la zanahoria y el palo para dominar o infiltrar. Cuando encuentran

³⁵ Durante los 80 y principios de los 90, el servicio de inteligencia guatemalteca notificó a sus organizaciones homólogas mexicanas sobre el surgimiento de organizaciones ilegales de narcotraficantes a ambos lados de las fronteras.

³⁶ Véanse Siedel, Thomas, Vickers y Spence (2002), Peacock y Beltrán (2004) e International Crisis Group (2010).

Operación lucrativa para ambas partes

Algunos miembros de la armada 'se privatizaron': fuerzas oscuras

Guatemala es el segundo mayor productor de opio en Latinoamérica

resistencia, emplean la extrema violencia. Por supuesto que utilizan sus guardias armados contra sus enemigos y adversarios. Por supuesto que asesinan a policías locales. Pero en general pretenden, sistemáticamente, sobornar a la policía local y a los funcionarios públicos locales, se congradan con las estructuras locales del poder (caciques) y alcaldes, y se infiltran, como benefactores locales, en los movimientos sociales locales y regionales. Los movimientos (indígenas) se pueden movilizar para protestar contra la 'remilitarización' de las antiguas zonas de guerra debido a los esfuerzos [a medio gas] del Gobierno por contrarrestar la creciente influencia de los narco-grupos.

En general intentan sobornar e infiltrar la policía local y los oficiales del sector público

También acomodaron a los carteles mexicanos (en particular Los Zetas y el cartel de Sinaloa) cuando cruzaron las fronteras en 2004 y 2005 en enormes todo-terreno Humvees, pero 'no fueron detectados' por los militares locales ni la policía local. Enfrentado a los aterradores Zetas, con formación y capacidad operativa militar, así como el muy violento cartel de Sinaloa, los líderes comerciales guatemaltecos optaron por asociarse y aliarse con los recién llegados. Éste es el caso en los departamentos del Petén y particularmente de Alta y Baja Verapaz.³⁷ Según altos funcionarios de la inteligencia militar, el 50% de la población en el departamento de Verapaz se simpatiza con los nuevos dueños del poder, están intimidados o aceptan ingresos de ellos. La otra mitad "continúa siendo leal a las autoridades legales, con suerte". La infiltración en los movimientos sociales indígenas locales y regionales podrá generar manifestaciones espontáneas para protestar en la capital cuando (esporádicamente) se arresten a los jefes locales. Los manifestantes llegan en buses, portando lemas de "No a la presencia militar en nuestras comunidades".

El 50% de la población de Verapaz simpatiza con el cartel mexicano como si fueran los nuevos magnates

Cuando los carteles extranjeros o los narco-grupos locales no desean identificarse con las actividades de intimidación o terror, siempre pueden acudir a sicarios locales. A diferencia de la situación mexicana, en el triángulo norte de América Central existen gran número de pandillas juveniles (maras).³⁸ El sicariato es una fuente común de ingresos, complementado por la extorsión a empresarios locales, pequeños negocios, chéferes de bus y taxi, y los 'impuestos revolucionarios' en los tugurios y barrios populares. La presencia de tantos sicarios en Guatemala produjo una reducción de las tarifas por asesinato. El costo de un homicidio contratado en diciembre 2010 se reportó en unos 100 a 150 quetzales (unos 10€-15€). Hay 1,6 millones de armas ligeras en América Central, de las cuales 500.000 están registradas legalmente.³⁹ Después de las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, los excedentes de los ejércitos centroamericanos se transformaron en un enorme sistema de mercado ilegal. América Central tiene seguramente el mayor porcentaje de armas per cápita en la región latinoamericana y del Caribe.

Los asesinatos por contrato y la extorsión son una fuente común de ingresos

Si la intimidación o corrupción de las autoridades locales no es motivo suficiente para su colaboración, el chantaje también puede aplicarse. El director de OASIS – un grupo de defensa de homosexuales y transexuales – comentó que la prostitución (heterosexual, homosexual o transgénero) en la Ciudad de Guatemala también está infiltrada por el crimen organizado y las narco-redes (locales) que chantajejan a los políticos y altos funcionarios municipales y nacionales. En 2010 y 2011 incluso miembros del gabinete y del parlamento estaban involucrados.

Se ofrece prostitución para chantajejar a políticos y funcionarios

³⁷ Briscoe y Rodríguez Pellecer (2010: 38 ff.) presentan un análisis detallado de tales redes en el departamento de Alta Verapaz.

³⁸ Véanse Gutiérrez Rivera (2009), Jones y Rodgers (2009), Mesa y Moorhouse (2009) y Savenije (2009).

³⁹ *Small Arms Survey* (2009).

Drogas e Instituciones Clave

La infiltración en las instituciones cruciales políticas y de seguridad se acompaña de la infiltración en las dependencias estatales y municipales de instituciones federales: la policía, el servicio de inteligencia local, y especialmente las alcaldías de las 338 municipalidades. Los alcaldes locales pueden emitir documentos de identidad (permitiendo la falsificación de documentación). No hay que olvidar las periódicas campañas electorales de los 25 partidos y los 158 curules del Congreso.⁴⁰ En la actualidad, 120 son candidatos para su reelección. Los funcionarios/as del PNUD y PDH y la mayoría de los expertos en seguridad que entrevisté están convencidos de los enormes aportes económicos de fuentes ilegales.

Grandes ingresos de fuentes ilegales en campañas electorales

Se cree que la policía nacional está gravemente corrupta y en crisis. Entre 2008 y 2010 no menos de seis Secretarios de Gobierno fueron designados; el actual es periodista. Un antiguo Secretario se ha fugado a España, acusado de organizar cuadrillas de sicarios para cazar a niños de la calle. También están arrestados el antiguo Presidente Portillo (2000 – 2004) y todo el alto liderazgo policial de 2009 y principios del 2010 (el Director General, el Director de Antinarcóticos, el responsable de control del crimen organizado, etc.), por cargos de fraude y corrupción sistemáticos y a gran escala. Recientemente Helen Mack, fundadora y Directora Ejecutiva de la prominente ONG de derechos humanos, Myrna Mack⁴¹, fue designada como delegada presidencial (miembro del Gabinete) con la tarea de reformar la institución policíaca.

La policía nacional está corrupta y en crisis

Fuentes dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y las/los autores de sus publicaciones⁴² consideran que la policía está altamente infiltrada. El CICIG menciona incluso que el 90% de todos los policías han recibido, al menos una vez en su carrera, una coima del crimen organizado. Ambas instituciones también consideran que la Corte Suprema y la Fiscalía Pública están intensamente infiltradas. A nivel regional, muchos funcionarios no se interesan en procesar a los criminales, probablemente por miedo o intimidación. Apenas el 2% de los cargos registrados se resuelven. Visité la Fiscalía en diciembre 2010 y me sorprendieron sobremanera la negligente vigilancia, el descuido de la privacidad y la falta de administración de carpetas y archivos.

Poca capacidad para llevar a juicio

Políticas Anti-Drogas

En la definición de políticas para contrarrestar estas tendencias, el Gobierno guatemalteco ha sido bastante flojo en la década del 2000. Ha permitido que un segmento muy grande de la policía nacional optara por una respuesta de 'no ver ni oír'. Los sobornos pequeños y grandes complementan los magros sueldos de los funcionarios policiales en la capital y los departamentos rurales. El Gobierno de Portillo – Ríos Montt (2000 – 2004) fue corrupto y dejó que pasaran cosas. El Gobierno de Berger (2004 – 2008) redujo las fuerzas armadas a un nivel mínimo de 14.000 efectivos. El Gobierno actual de Colom (2008 – presente) incrementó las fuerzas armadas hasta 21.000 pero parece que no le interesan las cuestiones de seguridad.

Débiles políticas de contrainsurgencia

No hay ningún plan operativo de seguridad.⁴³ En 2006, Guatemala recibió asistencia técnica del Consejo Salvadoreño de Seguridad y se elaboró un borrador de plan. Pero entonces se lo archivó. Se formó una suerte de consejo de

No hay un plan de seguridad operativo

⁴⁰ Véanse Saéñz de Tejada (2010) y Sánchez (2008) sobre el sistema de partidos en Guatemala.

⁴¹ Myrna Mack Chang, hermana de Helen, conocida activista por los derechos humanos, fue asesinada en 1990 por un escuadrón de la muerte. Después de la muerte de Myrna, Helen se hizo cargo de la ONG. Le ayuda el general peruano Rodolfo Robles, quien en 1992 y 1993 hizo público la participación de escuadrones de la muerte presidenciales (de Fujimori y Montesinos, véase el capítulo sobre el Perú) y tuvo que salir al exilio.

⁴² PDH (2009a, 2009b, 2009c).

⁴³ Formalmente, hay un sistema de seguridad nacional, cuya estructura legal es aprobada por el parlamento. Incluso se contempla una reforma de la policía. Muy recientemente, en el último año del gobierno de Colom, se dieron los primeros pasos hacia una reforma de la policía, al nombrar un equipo en base al personal de la ONG Myrna Mack.

seguridad, pero las convocatorias a reuniones no eran frecuentes. Entre octubre 2010 y enero 2011 se suspendieron totalmente las reuniones. En enero 2011 se nombró otro coordinador de seguridad, que fue jefe del comando conjunto de uno de los tres movimientos guerrilleros de Guatemala, el FAR.

Por la permanente fuga de los planes de gabinete, actividades anti-hampa previstas y procesos jurídicos continuos contra los grupos criminales involucrados en la narco-economía, el Gobierno guatemalteco pidió (y obtuvo la respectiva cooperación financiera y técnica) una institución internacional de control, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Institución internacional de control

La CICIG ha elaborado mapas nacionales, regionales y locales de 'círculos comerciales' en los que están involucrado empresarios, narco-grupos, instituciones bancarias, policías y también políticos. Es posible que la vieja aristocracia y la burguesía establecida no estén directamente involucradas, pero los nuevos ricos de los 80 y 90 se han implicado en la economía ilegal e ilícita con el blanqueo de dinero por las instituciones financieras, consiguiendo 'líneas de crédito informales' y con las obras de construcción de hoteles y condominios. Según datos inéditos de la CICIG, el 55% del territorio nacional está bajo el control del crimen organizado, particularmente de los narco-grupos.

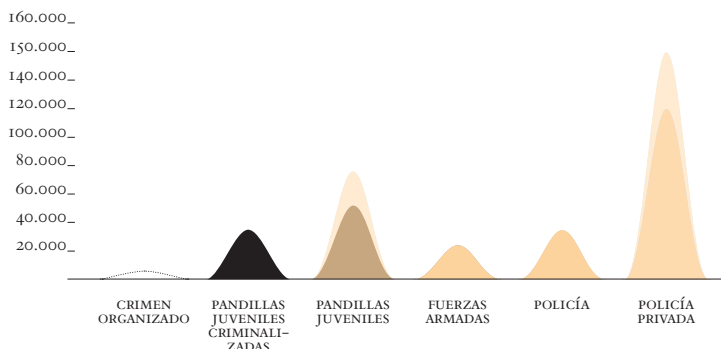
Actores en la economía ilegal

Hay un desnivel entre la magnitud de las estructuras oficiales de seguridad y los actores armados criminales en potencia. Los datos del PNUD y la CICIG arrojan el siguiente cálculo aproximado:

- **Crimen organizado:** al menos varios miles de elementos, organizados en mini-ejércitos con equipos modernos, y en general equipados con mejores armas que el ejército y la policía.
- **Pandillas juveniles criminalizadas** (maras): 35.000 miembros delincuentes.
- **Pandillas juveniles:** quizá 50.000 a 75.000 miembros, aún no criminales pero imitando las estructuras y el liderazgo de los modelos de las maras.
- **Fuerzas armadas:** 21.000 (antes 14.000) efectivos.⁴⁴
- **Policía:** 35.000 de personal y
- **Policía privada:** 120.000 a 150.000 miembros.

FIGURA 8

Las estructuras de seguridad frente los actores criminales



⁴⁴ RESDAL (2010: 227) todavía usa el valor anterior para el 2010 de 13.900 (13.000 ejército, 400 armada y 500 fuerza aérea). El incremento a 21.000 es muy reciente.

No hay suficiente acceso a equipos e información

Las fuerzas de seguridad están infraequipadas. Hay muy pocos helicópteros, aviones, barcos de gran velocidad y embarcaciones marítimas rápidas o vehículos adecuados de transporte. Incluso el combustible es escaso. Las computadoras avanzadas tampoco abundan. Además, hay una brecha en inteligencia. Un ex-Secretario de Seguridad comentó que todo el verdadero trabajo de campo, incluyendo las intervenciones telefónicas, está a cargo del ejército y adicionalmente de las redes privadas de seguridad e inteligencia. Dichas redes también son utilizadas por el crimen organizado. Con respecto al crimen grave y la narco-delincuencia, el Gobierno guatemalteco depende, como muchas otras administraciones latinoamericanas, enormemente del servicio extranjero de inteligencia, especialmente agencias estadounidenses como la DEA, CIA y FBI.

Los dos otros países del triángulo norte de América Central, El Salvador y Honduras, comparten muchos de los mismos problemas de Guatemala. Comentaré brevemente sobre la situación en ambos países.

El Salvador⁴⁵

Uno de los índices más altos de asesinatos

En términos estadísticos de homicidios (asesinatos por 100.000 habitantes), San Salvador es una de las aglomeraciones urbanas más inseguras del Hemisferio Occidental, y El Salvador es el país más inseguro del continente, con una tasa de asesinatos de más de 60 por 100.000 habitantes.⁴⁶ Tan sólo entre enero y mayo del 2010, se registraron oficialmente unos 2.000 asesinatos. En 2009 el promedio de muertes diarias fue de 12 y elementos violentos asesinaron a 4365. Además de los problemas del subempleo, la pobreza, informalidad y los efectos de la crisis económica, El Salvador se enfrenta a una fuerte amenaza contra su seguridad y estabilidad internas.

Delegación de las tareas policiales a las fuerzas armadas

La seguridad pública, normalmente de competencia exclusiva de la policía, del sistema judicial y penitenciario, también es tarea oficial de las fuerzas armadas en la actualidad. En su desesperación por el alarmante aumento de la criminalidad en el ámbito público y la aparente incapacidad de las fuerzas policíacas de restringir e incluso contener la violencia perpetrada por varios actores no estatales, el presente Gobierno del Presidente Funes delegó la mayor parte de la tarea policial de patrullar a las fuerzas armadas e incluso entregó la gestión del sistema penitenciario al ejército durante un año, con el consentimiento del parlamento y la opinión pública.

Hay tres segmentos de criminales o de criminalidad en potencia:⁴⁷

- **El crimen organizado**, cada vez más relacionado con el sistema transnacional del comercio en estupefacientes y enfrentándose actualmente con la competencia directa de los carteles colombianos y mexicanos. El crimen organizado también se asocia con el tráfico de armas ligeras.
- **Pandillas juveniles criminalizadas** (maras). Estas pandillas surgieron como secuela de los acuerdos de paz en 1992. Su mera existencia se basa en la violencia y el 'respeto'. Los rituales de iniciación se acompañan de la violencia. Extorsionan y a menudo asesinan a pequeños comerciantes, chóferes de buses y taxis, y pequeños empresarios en los distritos populares. Desde sus filas, el crimen organizado recluta y subcontrata a sus sicarios (para asesinar o intimidar).

⁴⁵ El Salvador tiene un personal de 14.000 incorporado en sus fuerzas armadas (12.600 ejército, 830 armada y 770 fuerza aérea).

⁴⁶ Véanse Bertelsmann Stiftung (2009) y Overseas Security (2010).

⁴⁷ Véanse Acevedo (2008), Cruz (2003), Cruz y Portillo (1998), Savenije y Van der Borgh (2009) y UCA (2010).

- **Pandillas juveniles.** En la actualidad no están dedicadas directamente a la delincuencia criminal. Sin embargo, las maras y sus miembros, los mareros, son su modelo a seguir. Las pandillas juveniles incluyen incluso estudiantes de secundaria y primaria, de 6 a 15 años.

Tal es la expansión de la violencia y el crimen que sólo un 3% de los homicidios salvadoreños se resuelve. Otro aspecto de la situación de inseguridad es la gran repercusión económica. Según un estudio contratado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los costos de la violencia fueron de 2.000 millones \$USA en 2006, el 11 por ciento del PIB.⁴⁸ La administración Funes ha ordenado que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rediseñe una estrategia con menos énfasis en la mera represión y para que alcance un equilibrio entre las políticas preventivas (comités vecinales) y represivas (policía y prisión, apoyadas por el ejército).

Efectos económicos de la violencia

Aunque la situación de seguridad generalmente se tipifica como alarmante, tanto los observadores extranjeros (Amnistía Internacional, el Departamento de Estado de los EEUU) como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportan una mejor cultura política con respecto a los derechos humanos. La PDDH es una oficina independiente; el Parlamento salvadoreño reconfirma periódicamente (cada tres años) al Defensor del Pueblo periódicamente El Defensor del Pueblo y sus asistentes hablan sin rodeos. Según la PDDH, el 45 % de todas las violaciones de los derechos humanos están relacionadas con la policía nacional.⁴⁹ Ésta es una de las razones de la delegación de la mayoría de las tareas policíacas a las fuerzas armadas, tal y como se menciona más arriba.

El papel del Defensor del Pueblo

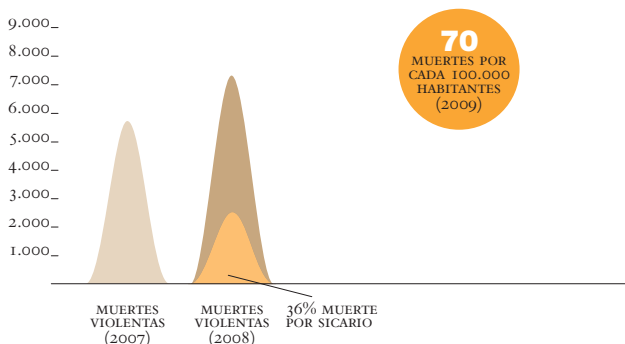
Honduras⁵⁰

Honduras se enfrenta en la actualidad con una gran amenaza a su seguridad y estabilidad internas. Con un número de víctimas mortales de 70 por cada 100.000 habitantes (2009) Honduras tiene una tasa de homicidios que duplica la de México, aunque éste sea mucho más notorio por sus recientes olas de asesinatos por los narco-grupos.

Crimen organizado en Honduras: una gran amenaza a la seguridad interna y estabilidad

FIGURA 9

Muertes violentas



⁴⁸ Acevedo (2008: 14).

⁴⁹ Datos proporcionados por el defensor del pueblo, Óscar Luna, después de su tercera reelección por el Parlamento, en una entrevista televisiva en el Canal 4, 24 junio 2010.

⁵⁰ Las fuerzas armadas de Honduras comprenden 8600 oficiales y demás personal (6500 ejército, 1000 armada y 1100 fuerza aérea).

Un reciente informe indica que, en 2008, ocurrió un total de 7235 muertes violentas, superando el total del 2007 en 1448.⁵¹ De todos los asesinatos, el 36% se registró como 'muerte por sicario', indicador directo del crimen organizado.

En Honduras, así como en Guatemala y El Salvador, están presentes las mismas tres categorías de criminalidad o criminalidad potencial: crimen organizado, maras, y pandillas. El crimen organizado, cada vez más relacionado con el sistema transnacional del comercio en estupefacientes, se enfrenta actualmente con la competencia directa de los carteles colombianos y mexicanos. El crimen organizado también se asocia con el tráfico de armas ligeras. Tal es la influencia de los narco-grupos que el Secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, solicitó en noviembre del 2010 el equivalente de la intervención del Plan Colombia por los EEUU en Honduras.⁵² El ex-Ministro Víctor Meza, Ministro del Interior del Presidente Zelaya, resumió la situación en una frase: "La policía es parte del problema, si no es el centro del problema".

El Triángulo Sur

Hay una notable diferencia entre los dos llamados 'triángulos' de América Central con respecto a la infiltración de las organizaciones criminales férreas y el nivel de violencia. El triángulo norte de El Salvador, Guatemala y Honduras está inmerso en el crimen y la brutalidad. El triángulo sur de Nicaragua, Costa Rica y Panamá es, en su mayor parte, una zona de relativa paz, aunque los niveles de criminalidad están aumentando. Se respeta a la policía, particularmente en Nicaragua.⁵³ La policía nicaragüense, institución sucesora a la Policía Sandinista, originalmente comprendía los miembros muy jóvenes de la milicia durante la revolución del 1979. Su liderazgo estaba formado por los comandantes guerrilleros más jóvenes.

Durante las últimas tres décadas, el contacto con las organizaciones de los barrios populares ha sido una prioridad general. Los comités de barrio están alertas al crimen en su territorio y tienen relaciones con la policía local. La 'prevención' e 'intervención rápida', e incluso programas de empleo para los jóvenes descarrilados de sus pandillas, son otra prioridad de la policía. Es sorprendente el número relativamente bajo de casos criminales y violentos y cómo las organizaciones de tráfico y contrabando (en su mayoría en la región del Atlántico) pasan desapercibidas en comparación con los tres países del triángulo norte. La situación panameña y costarricense es algo peor, pero en comparación con El Salvador, Guatemala y Honduras, es indudablemente mejor.⁵⁴

El triángulo del norte está plagado de crímenes y brutalidad mientras que el triángulo del sur es una zona donde reina una cierta paz

Prevención a través de organizaciones de barrio

⁵¹ PNUD – UNAH (2009).

⁵² *La Prensa*, 19 octubre 2010.

⁵³ Es notable observar que la policía nicaragüense ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a la confianza que tiene la sociedad en la policía y las fuerzas armadas según las encuestas del Latinobarómetro.

⁵⁴ Véase Meléndez et al. (2010) sobre la situación del crimen, el tráfico de drogas y la violencia en el triángulo sur de América Central.

Colombia⁵⁵

Colombia es un Estado paradójico, de inestabilidad estable y estabilidad inestable. Los ámbitos de estabilidad e inestabilidad, igualmente persistentes, se vinculan con la reciente historia económica, social e institucional del país. La explicación de esta contradictoria situación está en el hecho de que las instituciones democráticas funcionales regulan gran parte del territorio del país, mientras que, al mismo tiempo, Colombia es el mayor productor y exportador de cocaína y sufre las consecuencias de un conflicto guerrillero armado que lleva 60 años desarrollándose. La violencia interna ha costado la vida a miles de personas y se han desplazado entre 1,9 millón y tres millones en los últimos 10 años. Los niveles de emigración han subido abruptamente; según los cálculos de la ONU, aproximadamente 3,6 millones de colombianos han abandonado el país.⁵⁶

Las instituciones democráticas operativas regulan una gran parte del país mientras que es el mayor productor y exportador de cocaína, sufriendo además un conflicto guerrillero

Sin embargo, en términos de instituciones públicas y organizaciones a nivel local en la mayoría de sus ciudades, la vida institucional del país es sólida. Lo mismo puede decirse de su sociedad civil y sus medios de comunicación. Así como en el caso mexicano, Colombia no es de ninguna manera un Estado fallido. El sector público en Colombia es generalmente eficiente y competente. La subordinación de la fuerza pública a la autoridad civil está profundamente arraigada. El ejército colombiano no se ve como actor político, pese a la autonomía de facto de la que ha gozado en el pasado en las zonas de conflicto. El poder judicial ha podido fortalecer su independencia y eficacia en los años recientes.

Colombia no es en absoluto un Estado fallido

Colombia es el escenario de un conflicto interno muy complicado. Operan movimientos guerrilleros, desafiando la legitimidad del Estado. Hasta recientemente, hubo fuerzas paramilitares que luchaban contra la guerrilla pero al mismo tiempo aterrorizaban a la población local después de sus operaciones de 'limpieza'. Hay mini-ejércitos de los mini-narco-carteles que surgieron después de la desintegración de los carteles de Medellín y Cali en los 80. Además, hay 'nuevos actores de la violencia', grupos criminales sin agenda política. Reclutan a sus miembros en los segmentos sociales y regiones donde también reclutaban la guerrilla, las fuerzas paramilitares y las narco-pandillas. El narco-segmento de la economía colombiana representa tan sólo el 2% a 3% del PIB, pero en términos de sus consecuencias sociales y políticas, su trascendencia es enorme.⁵⁷ La trascendencia de la narco-economía debe medirse más bien en términos de su influencia corruptora, y porque constituye la base financiera de las fuerzas guerrilleras y paramilitares, las pandillas criminales y los propios carteles de la droga. A continuación, tipifico las varias categorías de actores armados.⁵⁸

Desequilibrio entre las consecuencias económicas y las sociales

⁵⁵ En este párrafo, hago uso de Kruijt y Koonings (2007, 2008).

⁵⁶ ACNUR (2007).

⁵⁷ Datos proporcionados por el Departamento de Estudios Económicos del Banco de la República de Colombia (abril 2007). Véase también Arango, Misas y López (2006).

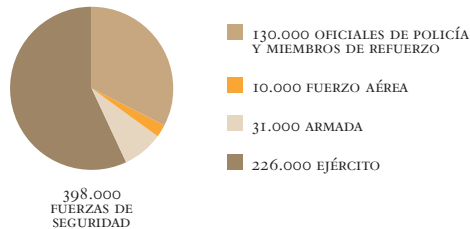
⁵⁸ Véanse Andrade Martínez-Guerra (2010), Ávila Martínez (2010), González, Bolívar y Vázquez (2006), Gutiérrez, Wills y Sánchez (2006), Leal Buitrago (1999, 2006a, 2006b), López Hernández (2010), Pécaut (2003), Rangel (2009), PNUD (2003), Villaraga Sarmiento (2006, 2009).

Papel de las fuerzas armadas

Las Fuerzas de Seguridad⁵⁹

Las fuerzas de seguridad en Colombia comprenden a 268.000 miembros de las fuerzas armadas (226.000 ejército, 31.000 armada y 10.000 fuerza aérea) y 130.000 oficiales de policía y miembros de refuerzo. El número total le coloca en segundo lugar después de Brasil, de hecho Colombia tiene un 80% del personal militar del Brasil, a pesar de que Brasil tiene casi cinco veces su población y ocho veces su extensión territorial.

FIGURA 10

Fuerzas de seguridad

En términos de su funcionamiento, los militares dependen en gran medida de la inteligencia proporcionada por los EEUU, situación también común en otros países latinoamericanos. La prioridad del ejército sigue siendo la operación contrainsurgente, recientemente rebautizada como "operaciones antiterroristas", contra "enemigos internos". Las actividades anti-narcóticos son otra prioridad militar, tarea que otros países latinoamericanos consideran principalmente un asunto de la policía. En general, el ejército ofrece liderazgo en el control de la policía y vigilancia en la aplicación de las medidas de seguridad pública. En el pasado, los miembros de las fuerzas armadas recurrían a la delegación tácita de las partes más difíciles de ciertas operaciones de contrainsurgencia y antiterrorismo a la fuerza paramilitar que estuviera activa en cada área.

Funcionamiento de la policía

Es apenas reciente que la policía esté presente en todas las 1911 municipalidades de Colombia. Antes del 2005, hubo 300 municipalidades que carecían de toda presencia policial. Sin embargo, en las regiones donde el conflicto es más grave, la policía está presente de forma más simbólica que otra cosa, y en general la policía es desapercibida en comparación con otros grupos armados. Según las fuentes de la UE, las tensiones van más allá de las existentes entre la policía y el ejército. Hay fricciones dentro de la propia policía y entre sus departamentos. Además el departamento de inteligencia se niega a cooperar con el departamento de investigación criminal, o con las aduanas y la autoridad tributaria.

Los Movimientos Guerrilleros⁶⁰

Las organizaciones guerrilleras activas en Colombia han estado presentes desde la época conocida como 'La Violencia' (1947-1958), cuando se dieron intensas confrontaciones entre los grupos armados de signo liberal y conservador. En los años 1970 y 1980 existían cuatro grupos guerrilleros grandes y algunos menores. Se negoció un acuerdo con dos de ellas, lo que permitió que se

⁵⁹ Véanse Borrero (2006) y Vargas Velásquez (2008, 2010).

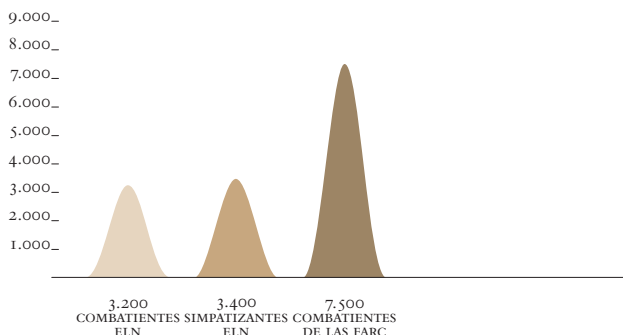
⁶⁰ Véanse Corporación Observatorio para la Paz (2009), Medina Gallegos (2008, 2009a, 2009b, 2009c) y Ortiz (2006).

rehabilitaran dentro del proceso democrático. En la actualidad, sólo las FARC (el grupo más grande) y el ELN (el grupo más pequeño) siguen recurriendo a la violencia. Según los cálculos aproximados militares, en el verano del 2007 había unos 3.200 combatientes y militantes del ELN y 3.400 simpatizantes, y al menos 7.500 combatientes activos de las FARC en sus varios frentes.

Historia del movimiento guerrillero

FIGURA II

Los movimientos guerrilleros 2007



37

Al comienzo de la segunda década de este siglo, esta situación no se ha modificado. Al comienzo de los 80, la mayoría de los grupos guerrilleros cobraban un “impuesto revolucionario” de los productores y traficantes de cocaína en “sus” áreas de influencia. Más tarde, muchos frentes de las FARC (formaciones militares-políticos locales) ofrecían protección e incorporaban el cultivo de la coca en sus operaciones militares y financieras. El ELN depende más del dinero de rescates obtenidos de secuestros de miembros de la élite económica – más recientemente empresarios seleccionados al azar y pasajeros en buses – y el “impuesto revolucionario” recaudado a los negocios locales, para su financiamiento. Los objetivos del ELN y de las FARC reflejan la ideología de izquierda de los grupos armados activos en América Latina desde los 60 hasta los 80. 25 años después, mucho ha cambiado en América Latina, pero el discurso ideológico de la guerrilla suena como el de Albania antes de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, la simple presencia y actividad de estos grupos garantiza la continuación de la lucha armada. Y su fuerza negociadora se basa en el hecho de que representan una fuente formidable de desestabilización.

Financiación de la guerrilla

Las Fuerzas Paramilitares⁶¹

En repetidas ocasiones, el Gobierno colombiano autorizó la creación de organizaciones regionales de auto-defensa (grupos paramilitares) para realizar actividades contrainsurgentes. En 1981, los carteles de la droga en Cali y Medellín formaron unidades paramilitares para impedir el secuestro y la extorsión a sus propios miembros. Varios (ex) oficiales del ejército de alto rango se unieron a esta iniciativa. Otros empresarios rurales pronto siguieron su ejemplo, lo que generó grupos de ejércitos regionales privados y sicarios – en su mayoría en el norte y occidente del país.

Aparición de grupos paramilitares como organizaciones de autodefensa

⁶¹ Véanse Ávila Martínez (2010), Camacho Guisado (2006), Duncan (2006), Henna (2009) y Romero (2006).

Estos grupos paramilitares ofrecían protección contra los grupos guerrilleros locales y pronto se establecían como la alternativa contrainsurgente, con o sin el consentimiento de las fuerzas armadas en la región. Gradualmente establecieron 'zonas limpias' donde aplicaban la ley mediante la violencia, extorsión e intimidación. En 1997, estas fuerzas regionales se unieron para crear las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), una confederación de grupos paramilitares. Las antiguas alianzas entre los carteles de la droga y los líderes paramilitares pronto se consolidaron en entidades unificadas. Los niveles superiores de los grupos paramilitares pronto ingresaron en los negocios "legítimos": adquirieron bienes raíces en el campo y financiaban las campañas políticas locales y regionales para los políticos 'obedientes', fenómeno conocido como la 'para-política'.

Unificación de grupos paramilitares

En 2004, por la intervención de dos obispos regionales, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las AUC, en base a su desarme, rehabilitación en la vida política y la garantía de que no serían extraditados a los EEUU. El acuerdo se alcanzó bajo los auspicios de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, el Fiscal General todavía tiene la obligación de perseguir a los asesinos o los perpetradores de otros terribles crímenes, y la Ley no constituye una amnistía general.

Acuerdo entre el gobierno y los grupos unidos de paramilitares

Los Carteles de la Droga y Narco-Grupos⁶²:

El primer cultivo ilegal para el mercado de exportación fue de marihuana y se realizó entre empresarios y traficantes locales en los años 70. La segunda fase vio la fundación de los carteles de Cali y Medellín entre los 70 y 80 y llevó a una división mucho más sofisticada del trabajo entre productores, los que cortan las drogas, los traficantes, los que lavan el dinero y toda una serie de intermediarios internacionales. Los jefes de los grandes carteles de Medellín y Cali formaron y subcontrataron sus propias fuerzas de seguridad y guardaespaldas, al mismo tiempo que cooptaron e intimidaron a los políticos locales, regionales y nacionales.

Primera fase: cultivo ilegal de marihuana en los 70; Segunda fase: fundación de los carteles de Cali y Medellín

El uso de la para-política (véase a continuación) pronto se difundió entre los 250 a 300 mini-carteles que nacieron después de la descomposición de los dos grandes carteles y, más específicamente, en las organizaciones paramilitares. El establecimiento de los mini-carteles representa la tercera fase (1995 – 2000) y trajo consigo nuevas alianzas con distribuidores e intermediarios de otras partes de Sudamérica (especialmente Perú), América Central y México. La cuarta fase, desde alrededor del año 2000 hasta la actualidad, ha visto un panorama cambiante de cultivo intensivo, control regional, y la división entre los varios grupos armados ilegales en términos de sus sitios de producción, transporte y tráfico, conjuntamente con un esfuerzo gradualmente más sistemático del Estado para erradicar el comercio a gran escala.

Tercera fase: fundación de minicarteles; Cuarta fase: cambio de cultivo y división del control

Los EEUU se unieron a este esfuerzo con extensos programas de fumigación de cultivos ilícitos, así como ayuda militar y financiera directas. La fumigación sigue siendo controvertida; los informes de ACNUR a mediados de los años 2000s sugieren que hasta el 50% de los refugiados internos/as son el resultado directo de esta política.⁶³ Esta lúgubre perspectiva se complica aún más por las riñas internas entre los varios grupos armados, las actividades del ejército y la migración interna forzada de la población local. La única conclusión posible es

I tráfico de droga ha alcanzado una estabilidad a largo plazo

⁶² Cito aquí directamente a Kruijt y Koonings (2008).

⁶³ ACNUR (2006).

que el comercio en drogas ilegales ha logrado una estabilidad a largo plazo, lo que puede explicar por qué no se frena la corrupción que genera, ya que el tráfico ilícito continúa financiando la violencia de los grupos armados en el conflicto, por supuesto con la excepción del propio Estado.

El Proceso de Desmovilización en los años 2000⁶⁴

Para fines del 2010, unos 50.000 combatientes habían entregado sus armas y la mayoría de los soldados, tanto altos oficiales como soldados rasos, habían iniciado el proceso de rehabilitación con la promesa de sentencias significativamente poco severas. En el caso de las fuerzas paramilitares, el proceso de desmovilización fue el resultado de negociaciones. Estas tuvieron lugar entre el 2003 y el 2007, a nivel nacional, entre el Gobierno y los líderes políticos y militares de las formaciones paramilitares, y a nivel regional (Antioquia, Medellín) entre el Gobierno departamental y municipal y los múltiples actores armados. Alrededor de 35.000 miembros de estas organizaciones se desarmaron y se desmovilizaron colectivamente. En Colombia existe la posibilidad de la desmovilización individual (es, de hecho, una desertión) a través de una autoridad local, un líder religioso o un oficial militar y/o policial. Hasta marzo de 2009, se registraron unas 15.000 desmovilizaciones individuales, en su mayoría miembros de la guerrilla.⁶⁵

Negociando la desmovilización

No hay consenso si han desaparecido las fuerzas paramilitares o no. Sin embargo, sí hay consenso sobre la capacidad de los dos movimientos guerrilleros para volver a reclutar y mantener su capacidad militar, aunque a un nivel inferior. Mientras que la mayoría de los analistas coinciden en que se ha reducido considerablemente la violencia paramilitar, otros sostienen que los grupos paramilitares han estado volviendo a formarse en pandillas criminales locales de menor tamaño, comparables a los mini carteles de la droga que surgieron después de la caída de los carteles de Cali y Medellín. Sea como sea, el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares ha contribuido a reforzar el monopolio del Estado sobre la violencia legítima.

Reducción de la violencia paramilitar

Sin embargo esto no explica totalmente la situación. Los informes oficiales e informes trimestrales del monitor internacional MAPP – OEA (entidad de la Organización de Estados Americanos, financiada en su mayor parte por donantes bilaterales europeos) mencionan el surgimiento de lo que eufemísticamente se han calificado como ‘nuevos grupos armados ilegales’. La mayoría de los analistas colombianos suponen que estos nuevos grupos reclutan considerablemente entre los desmovilizados, generalmente los colectivos desmovilizados. Aunque los desmovilizados están ‘re-socializándose’ mediante un programa de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzadas en Armas (ACR), este programa no había logrado, hasta el 2009, resultados visibles. Las evaluaciones internas y externas fueron en su mayor parte negativas.

Los nuevos grupos armados ilegales reclutan miembros entre los desmovilizados

Como resultado de todo lo anterior, la situación actual es muy complicada. En cuanto a las fuerzas guerrilleras, están mucho más a la defensiva que en los cinco años anteriores. Los militares, la policía y las instituciones de seguridad ya están pensando en términos de un ‘período pos-conflicto’. La propia idea es por lo menos discutible. Pese a todo el discurso oficial, nunca se ha establecido

Programas de contrainsurgencia centrados en la guerrilla o en la desarticulación de todos los grupos del crimen organizado

⁶⁴ Véanse CNNR (2010), Kruijt (2009), Procuraduría (2008) y Rivas Gamboa y Méndez (2008). Véase también el Número Especial de Política Colombiana, *El laberinto de la seguridad* (2010).

⁶⁵ Para un análisis crítico de los datos oficiales, véase Medina (2011). Él sostiene que, si los datos del Ministerio de Defensa fueran correctos, las FARC se habrían aniquilado tres veces.

claramente si los programas colombianos con apoyo estadounidense anti-drogas se centraron en la contrainsurgencia anti-guerrilla o se trataba de una estrategia más coherente concentrada en la desarticulación de todos los grupos de crimen organizado que operaban en Colombia.

Durante la década del 2000, la estrategia general era militar: la “reconquista” políticas militares dirigidas principalmente contra las fuerzas guerrilleras asociadas con la coca y lateralmente contra los nuevos perpetradores de la violencia. En los últimos tres años la estrategia ha sido más integral: la captura territorial y subyugación de los actores armados, acompañadas de programas de rehabilitación económica y social. La Procuraduría y la Defensoría adquirieron más control sobre la manera en que operan los servicios de seguridad.⁶⁶

La presencia del sector público en las ‘zonas pacificadas’ ha mejorado. La Defensoría tiene una unidad especial para la ‘alerta temprana’.⁶⁷ Sin embargo, aunque se pudiera vencer a las restantes organizaciones guerrilleras a la fuerza u obligarles a negociaciones vinculantes sobre la paz y desmovilización, todavía habría múltiples actores armados ilegales cuya base económica es el tráfico de drogas. En la actualidad, y en particular en los departamentos norte, sur y del Pacífico en Colombia, todos estos grupos (incluyendo la guerrilla) operan a veces en alianza, y a veces hacen la guerra contra sus competidores locales sobre el control territorial y/o las rutas comerciales.

En la actualidad, en las regiones donde los paramilitares “limpiaron” las fuerzas guerrilleras, nuevos actores armados ilegales como los Urabeños y los Paisas, sin la ideología de la ‘patriótica guerra contra los Comunistas’ han reemplazado su presencia, con la misma violencia y brutalidad. En los departamentos sudoccidentales del Cauca, Nariño y Putumayo, se libra un nuevo e intenso conflicto armado con nuevos actores como los Rastreos y las Águilas Negras, a veces en alianza, a veces en disputa con los grupos de combate de las FARC. El ejército y la policía tratan de dominarles pero no tienen ninguna certeza de ser la única fuerza ofensiva. De tiempo en tiempo incluso los destacamentos policiales y del ejército (o al menos sus oficiales) participan de esta compleja estructura de la violencia mediante las alianzas pacíficas. Estas regiones son dominadas por pandillas y armas.

La victimación de la población civil se intensificó. En los 90 y principios del 2000, las FARC y las AUC tendían a evitar las confrontaciones directas a gran escala prefiriendo, en cambio, subyugar a las comunidades y poblaciones e impedir los movimientos de sus adversarios. Esto llegó al uso táctico de los métodos de la ‘guerra sucia’, con enormes consecuencias negativas para la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Este panorama incluyó la vinculación de las fuerzas de seguridad del Estado con los paramilitares en una estrategia tácita de contrainsurgencia conjunta.⁶⁸ Especialmente las diferentes unidades paramilitares se hicieron famosas por sus sistemáticas atrocidades contra la población civil. En el transcurso de los 90, se reportaron con más frecuencia incidentes en los que las fuerzas de seguridad pública hacían uso de este tipo de violencia. En el segundo lustro del nuevo siglo, parece que han mejorado la ética y disciplina

Políticas militares más integradas junto con rehabilitación económica y social

Incluso si se lograra dominar a las organizaciones guerrilleras, todavía quedarían diversos actores armados ilegales

Nuevos actores ilegales armados luchan en intensos conflictos

Se intensificó el maltrato de la población civil

⁶⁶ La Procuraduría es la entidad jurídica independiente “representante de la sociedad colombiana” con el poder de imponer sanciones en el caso de alguna actividad ilegal por los miembros de cualquier organismo dentro de la administración pública, desde los ministros hasta los servidores públicos de menor jerarquía. La Defensoría es una autoridad más bien moral, sin atribuciones específicas de imponer sanciones. Tiene la tarea de proteger los derechos humanos y denunciar, con una voz independiente, cualquier violación de estos derechos.

⁶⁷ El Sistema de Alerta Temprana (SAT), anteriormente un proyecto de cooperación financiado casi totalmente por la USAID, está incorporado actualmente en la Defensoría. El SAT entrega sus informes a una comisión de alto nivel. Véase SAT (2008).

⁶⁸ Véase PNUD (2003).

interna de las fuerzas armadas y la policía. Desde el poder judicial, la Procuraduría y la Defensoría todavía se culpa a las fuerzas de seguridad de violaciones de los derechos humanos que son más que incidentales.

Con respecto a las instituciones públicas, la estructura de múltiples actores armados ilegales, impulsados por la narco-economía, corrompe con sus métodos de la zanahoria y el palo, al igual que en otras partes de México y América Central así como en Sudamérica. Aunque no se sabe la precisa magnitud del fenómeno, se sabe que el dinero para la corrupción derivado de las drogas invade toda la trama institucional de Colombia en la mayoría de los niveles. El uso de la violencia e intimidación induce o paraliza las acciones de los funcionarios y los oficiales de policía de forma que conviengan a los intereses de los grupos 'antiguos' y 'nuevos' de violencia. La corrupción y coacción son una causa importante de la erosión institucional, especialmente a nivel local.

La corrupción y la coacción ocasionan en gran parte la erosión institucional

41

Los efectos son particularmente visibles a nivel local y en las zonas periféricas del norte y sur, donde los insuficientes recursos financieros y humanos y la falta de un respaldo eficaz de los niveles superiores han debilitado las instituciones públicas locales y municipales, e incluso una ausencia total de instituciones públicas operativas. La fragilidad parcial del Estado y los vacíos del Gobierno han creado situaciones en las cuales la ausencia del Estado ha sido la experiencia común de toda una generación.

Fragilidad estatal parcial y vacíos del gobierno

Durante el auge del cartel de Medellín, las tácticas empleadas con este fin eran burdas: buscar un cargo público en base a un prestigio social (Pablo Escobar sirvió como senador alterno durante un período breve en los 80) o intimidar al Estado mediante el terror (asesinatos y bombas): las tácticas de plomo-o-plata. Durante los 90, los actores ilegales desarrollaron instrumentos más sutiles, como el financiamiento de las campañas electorales de importantes políticos a nivel nacional.

En los 90, los actores ilegales desarrollaron ingeniosos instrumentos, como la financiación de las campañas electorales de políticos importantes

La consecuencia a largo plazo es la captura de partes de la sociedad política por la sociedad no civil de los múltiples actores armados. Implica actividades desde el control de los bastiones regionales hasta la conspiración con algunos congresistas, o el control sobre ellos. También implica penetrar dentro de los partidos políticos a nivel nacional, regional y municipal.⁶⁹ Aunque la mayoría de estas presiones y corrupciones se realizan a nivel local, los vínculos entre el liderazgo de los actores armados y el sistema político nacional también se demostraron en los 90 y principios del 2000. Esta estructura se llama sistema de la para-política. El último escándalo nacional para-político sucedió en 2007 cuando se cuestionaron incluso vínculos presidenciales con prominentes comandantes paramilitares.

Para-política: penetración de partidos políticos a nivel nacional, regional y municipal

Una iniciativa legal muy reciente e innovadora se refiere a la posibilidad de vetar a posibles candidatos políticos/as que tengan narco-vínculos, al mismo tiempo que se responsabilizaría al partido político. Por primera vez en América Latina, los partidos políticos son responsables (expuestos a sanciones y la pérdida de un curul en el parlamento) en caso de un representante corrupto. La llamada 'ley estatutaria' todavía tendrá que aprobarse por la Corte Constitucional en el 2011.

A los partidos políticos se les considera responsables en caso de representante corrupto

⁶⁹ Para un análisis reciente de la estructura de los partidos políticos de Colombia y sus políticas en materia de seguridad, véase Leal Buitrago (2010a, 2010b, 2011). No hay agendas específicas anti-violencia publicadas por los partidos políticos. La mayor parte de la argumentación todavía se refiere a intervenciones militares y policíacas. En algunos casos se enfatiza la infraestructura social y la presencia de las instituciones 'civiles'.

Bolivia y Perú

Bolivia es el tercer país productor de coca, después de Colombia y Perú.⁷⁰ Además de productor, es un país de transición. La cocaína peruana se trasladada por Bolivia en su camino hacia Brasil, Argentina y Chile. La mayoría de los analistas informan que, de toda la cocaína que ingresa al Brasil, el 80% pasó por Bolivia. Así como en el Perú, el cultivo de la coca tiene una tradición de muchos siglos. Los pueblos indígenas en las sociedades pre-Aymará y pre-Quechua ya utilizaban las hojas de coca con fines ceremoniales y médicos. Bajo la colonia española, y durante el período republicano del siglo XIX, estas costumbres y culturas nunca se pusieron en duda. Hasta los años 60, esta situación permaneció sin cambios pero con el surgimiento de los mercados de la cocaína y las reacciones fuertemente prohibitivas del Gobierno estadounidense, las condiciones han variado.

En Bolivia el cultivo de coca es una tradición centenaria y nunca se puso en duda hasta el siglo XIX

Otra característica es la relativa ausencia de violencia relacionada con el crimen en ambos países. En el Perú hay movimientos cocaleros; en Bolivia el movimiento cocalero es parte de los varios movimientos sociales que constituyen la base política del partido actual de gobierno. En comparación con Colombia, el nivel de violencia directamente asociada con el cultivo de la coca es asombrosamente moderado en el Perú, y considerablemente bajo en Bolivia.

El nivel de violencia asociado directamente con los cultivos de coca es considerablemente bajo en Bolivia

Bolivia

Bolivia tiene dos regiones que cultivan coca: la serranía de Yungas cerca de La Paz, y el valle Chapare cerca de Cochabamba. La zona tropical del Chapare (el Trópico de Cochabamba) es apropiada para cultivos rotativos intensivos, mientras que en la zona desolada de Yungas hay pocas posibilidades de otros cultivos sustitutos.

Dos regiones de cultivo de coca en Bolivia

Políticas Anti-Drogas

Las políticas nacionales con relación al cultivo de la hoja de coca y la producción de la cocaína han oscilado fuertemente entre mediados de los 1960 y la actualidad. En el período de los gobiernos y dictaduras militares, desde Barrientos (1966 – 1969) y Banzer (1971 – 1979) hasta García Meza (1980 – 1981) y la junta militar del 1982, siempre estuvieron presentes las pandillas de la cocaína y otras organizaciones criminales. El Ministro del Interior Arce Gómez, mano derecha del dictador García Meza, fue condenado por su cooperación ilícita con las narco-organizaciones.

Las políticas nacionales antidroga han ido cambiando profundamente

También en el período de los gobiernos democráticos eran evidentes las conexiones entre lo legal y lo ilegal con respecto a la coca y cocaína. Oscar

⁷⁰ La mayoría de los datos estadísticos vienen de Vellinga (2004), CONALTID (2007), Salazar Ortuño (2008, 2009) y UNODC (2010d).

Las conexiones entre lo legal y lo ilegal eran evidentes

Eid, un importante político del MIR de izquierda durante la presidencia de Jaime Paz Zamora (1989 – 1993) fue a la cárcel después del descubrimiento de sus estrechos vínculos con el crimen organizado. El empresario Max Fernández, un político influyente en Santa Cruz, compartió el mismo destino.

Durante los sucesivos gobiernos democráticos, la mayoría de las políticas nacionales procuraron reducir el cultivo de la hoja de coca, fomentar el desarrollo alternativo, y obligar su erradicación. Geográficamente, estas políticas se refirieron básicamente a dos regiones: Las políticas consecutivas fueron:

El **Plan de Tres Años** (1985 – 1989) que limitó el cultivo 'legal' de coca bajo la Ley 1008 en el 1988 y que principalmente pretendió erradicar la coca de las Yungas en tres años; El **Plan de Coca por Desarrollo** (1989 – 1993); El **Plan Opción Cero Coca** 1994 – 1997; El **Plan Dignidad** 1997 – 2002; El **Plan Bolivia** 2002 – 2004; La **Estrategia Integral Boliviana de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas** (2004 – 2008).

Algunas políticas consiguieron un éxito relativo

Estas políticas se centraban fundamentalmente en las dos regiones arriba mencionadas. En el Chapare, estas políticas fueron relativamente exitosas. Más del 50% de las familias que cultivaban coca participaron en programas para producciones alternativas, financiadas sobre todo por USAID.

En 1980, el Trópico contaba con 40.000 ha. de coca y 40.000 ha. de cultivos de frutas, bananas y yuca. En el 2010 se construyeron más de 2.000 km. de carreteras grandes y menores. En la actualidad, 100.000 ha. agrícolas se utilizaron para bananas, palmito, frutas cítricas, arroz, piña y otros productos exportables.

Algunas políticas se encontraron con una gran resistencia

Las políticas anteriores de erradicación también produjeron una resistencia enorme entre los campesinos que cultivaban la coca. El líder del movimiento laboral y político Evo Morales lideró las acciones de protesta, y luego fue candidato presidencial. Después de dos gobiernos impopulares de tipo neoliberal, entre 2000 y 2005, Morales llegó a la presidencia. Fue reelegido en el 2009 con una mayoría abrumadora.

El presidente Evo Morales es también presidente de la federación de cocaleros

El Presidente Evo Morales (2006 – 2010, 2010 – presente) es al mismo tiempo Presidente de Bolivia y Presidente de la Federación de Cocaleros en el Chapare.⁷¹ Esta Federación es una de las múltiples estructuras sindicales, sociales e indígenas que constituyeron el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de gobierno que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento.⁷²

Cultivo Legal e Ilegal de la Coca

Parte de la producción de hoja de coca boliviana es legal

Parte de la producción boliviana de hojas de coca es legal. El Vice-Ministerio de Coca y la Dirección General de Hoja de Coca y su Industrialización administran la cosecha e industrialización de las hojas de coca. La hoja y el mate de coca se consumen en el mercado interno de Bolivia (y Perú) y en el norte de Argentina (Jujuy y Salta).⁷³ Un pequeño grupo de 140 policías (el Grupo Especial de Control de Coca) supervisa las actividades de los 11.000 comerciantes registrados de hoja de coca y los 72.000 productores registrados.⁷⁴ Una pequeña cantidad de hojas de coca se ha exportado a los EEUU.⁷⁵ Desde el 2003, el importador estadounidense prefirió el mercado peruano de coca, más económico.

⁷¹ Presidente del comité coordinador de las seis federaciones del trópico de Cochabamba (región Chapare).

⁷² Para un análisis del MAS y las estructuras políticas y sociales bolivianas, véase la reciente antología publicada en Tinkazos (2010).

⁷³ La hoja de coca también se procesa para elaborar productos médicos.

⁷⁴ Mis entrevistas. Véase también *La Razón* de 31 enero 2011.

⁷⁵ Por la compañía exportadora ALBA-export.

La producción legal de coca se organiza en catos (parcelas de 40 por 40 metros) a nivel familiar. Sin embargo, durante los últimos cinco años, muchos 'nuevos' productores fueron admitidos, en su mayoría hijos/as y parientes de los primeros licenciatarios. De hecho, el sistema de los catos se ha ampliado para permitir la tenencia por varios familiares a la vez. En el mismo período, la pasta de coca y cocaína artesanales bolivianas se mejoraron para alcanzar las normas colombianas, utilizando hornos microondas y otras instalaciones de cocción. Esta innovación tecnológica produce aproximadamente el doble de pasta de una determinada cantidad de hojas de coca.

El sistema cato: producción en parcelas familiares

En el 2009, la UNODC estimó el número de hectáreas de cultivo de coca en 30.900 ha.⁷⁶ Otros analistas tienden a hacer cálculos aproximados aún más altos. Según la Ley 1008, el máximo legal son solo 12.000 ha., sin embargo y desde entonces el Gobierno aumentó el mínimo legal a 20.000. ¿Qué es por lo tanto legal? En 2010 entre 10.900 y 18.900 ha. (depende de cuál sea la cuota máxima 'legal') de las 30.900 ha. de Bolivia con cultivo de coca está destinado a los mercados extra-legales.

Aumento de la cuota máxima legal

Otros analistas aseveran que el volumen boliviano de coca es aún mayor: hasta 40.000 ha. Ex funcionarios jurídicos del sector público a quienes entrevisté, bajo la promesa de anonimidad, nos aseguraron que al menos 28.000 ha. están bajo el control de grupos ilegales y narco-traficantes. Independientemente del volumen exacto del cultivo boliviano de la coca, es innegable que la coca peruana, de menor precio, también ha penetrado el mercado boliviano. Es fácil descubrir pruebas de la producción ilegal. A principios de febrero 2011, viajé durante dos horas fuera de los límites urbanos de los barrios populares de Cochabamba. Pude identificar, en un tramo de 700 metros de carretera, al menos cinco montones de remanentes de hojas de coca y la cal utilizada para la transformación en pasta de coca o cocaína. Esto se refiere únicamente a las actividades domésticas a pequeña escala. A pesar de que hay cálculos aproximados sobre el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que depende del negocio de la coca la mayoría de los analistas coinciden en un 4-5% de participación.

Producción ilegal

La Influencia de las Mafias Extranjeras

Las autoridades no ocultan sus preocupaciones sobre la influencia de los grupos criminales bolivianos y, sobre todo, las infiltraciones de mafias externas (en su mayoría, brasileñas, pero también colombianas y venezolanas, e incluso mexicanas y argentinas). Estas hampas criminales armadas no sólo trafican en drogas, sino también en personas (mujeres y menores), armas y contrabando. Tan sólo en el 2010 un 10 a 20% de las hojas de coca legalmente cultivadas (19.050 toneladas – es decir, entre 1905 y 3820 toneladas) fueron transferidas a la economía ilegal. En el verano del 2010 el Vicepresidente de Bolivia, García Linera, declaró oficialmente que el comercio ilegal en coca ascendía a 600 millones \$ USA. Según la mayoría de los analistas, este cálculo aproximado minimiza el monto. El Presidente Morales admitió también en octubre 2010 que los sindicatos y federaciones de los coccaleros de Chapare son bastante flexibles con el sistema de los catos y tienden a entregar la cosecha excedente a comerciantes en coca para fines ilegales.

Los coccaleros tienden a entregar el excedente de la cosecha a traficantes de coca

⁷⁶ UNODC (2010d).

Como país de interior, Bolivia cuenta con una frontera larga de 8000 kilómetros de largo y extremadamente porosa: tan sólo 600 policías patrullan la gran zona selvática que limita con el Brasil, incluyendo la policía especializada anti-narcóticos. La región fronteriza con el Perú, que es el segundo mayor productor y exportador de coca, tiene aún menos vigilancia policial. El Lago Titicaca (dividido en sus partes boliviana y peruana) prácticamente no tiene patrullas. En conferencias confidenciales para el cuerpo diplomático, altos integrantes del gabinete reconocen francamente que la región amazónica boliviana (junto al Mato Grosso del Brasil) es la nueva área de expansión del contrabando con la construcción de laboratorios de alta tecnología (que casi alcanzan las normas colombianas de sofisticación). En 2010 unos 20 laboratorios fueron desmantelados por las fuerzas de seguridad nacional. En algunos casos, sus propietarios fueron notificados con anticipación por policías corruptos.

Una frontera extremadamente porosa

Financieros brasileños y de otros países también compran haciendas bolivianas. El blanqueo de dinero se hace a gran escala en el sector de la construcción en Cochabamba y Santa Cruz. Información no oficial involucra a buena parte de la clase empresarial de los departamentos amazónicos del Beni, Pando y Santa Cruz. Se considera que algunas de las ciudades amazónicas fronterizas de Bolivia son ocupadas por las mafias brasileñas.

El blanqueo de dinero en el sector de la construcción de las mafias brasileñas

Las Fuerzas Armadas, la Policía y el Poder Judicial

La policía y las fuerzas armadas son leales al Presidente y al partido de gobierno.⁷⁷ Al contrario de cómo actuaban en el pasado, bajo el régimen democrático, las fuerzas de seguridad no son actores políticos y apoyan a los administradores civiles. De hecho, ya que las estructuras del gobierno se basan sobre los movimientos sociales, las fuerzas de seguridad tienen apenas un interés marginal en los juegos del poder político. Según varias personas clave a quienes entrevisté, tanto la policía como las fuerzas armadas son instituciones con estructuras normativas y legislación anticuadas.

La policía y las fuerzas armadas son leales y apoyan el gobierno

Las fuerzas armadas de Bolivia declararon en el 2010 que eran una institución 'socialista', 'anti-imperialista' y 'anti-capitalista', 'en pleno apoyo al Estado Plurinacional de Bolivia del Presidente Morales' y la ideología política del partido de gobierno, MAS.⁷⁸ El alto mando y los oficiales de las fuerzas armadas consideran que su institución es 'apreciada por el Gobierno'. Ayudan con la vigilancia de la frontera, y cumplieron un papel de apoyo durante la nacionalización de la industria petrolera y del gas.

Sin embargo, la policía es corrupta.⁷⁹ Su institución es bastante independiente. Al contrario de la situación en, por ejemplo, América Central, la inteligencia nacional es de dominio exclusivo de la policía. Controlan las áreas estratégicas de la inmigración, la administración de la identificación ciudadana, el tránsito y su control, la matriculación de vehículos y el transporte. Están formalmente a cargo de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. También están a cargo de la seguridad del Estado y la seguridad de las embajadas, los diplomáticos y miembros del gabinete. Sus sueldos son bajos. Hasta hace poco, recibían subvenciones de organismos estadounidenses, particularmente de la DEA. Sus oficiales son propensos a la corrupción a pequeña y gran escala. La mayoría de las fuentes entrevistadas coinciden en las conexiones entre la policía y el crimen

La policía es bastante independiente y corrupta

⁷⁷ El número de efectivos en las fuerzas armadas bolivianas asciende a unos 40.000 (25.000 ejército, 5000 armada y 5.500 fuerza aérea).

⁷⁸ Véase *El País*, 16 noviembre 2010. El diario cita al general Cueto, jefe del ejército boliviano, cuya declaración pública en el Colegio Militar en La Paz fue secundado por el Presidente Morales, visiblemente emocionado. Para un análisis reciente de las fuerzas armadas bolivianas, véase Tellería Escobar (2010).

⁷⁹ Véase, para un análisis serio del sistema boliviano de policía, Quintana (2003).

organizado. Se sabe que venden armas a las mafias brasileñas. Cuando se publican escándalos sobre el blanqueo de dinero, la coima y otras actividades criminales, no pocas veces están involucrados altos oficiales de la policía.

Hasta el 2008 la policía boliviana coordinaba sus esfuerzos con la DEA. Sin embargo, en el 2008 la DEA fue expulsada de Bolivia.⁸⁰ En el 2007 se declaró al embajador estadounidense, Philip Goldberg persona non grata. El Presidente Morales también redujo el alcance y la manera de operaciones de USAID en Bolivia. Una de las razones para expulsar a la DEA fue que, en 2003, la DEA había solicitado que la Unidad de Investigación de la Superintendencia de Bancos realizara una investigación financiera de las cuentas bancarias de los entonces parlamentarios, Evo Morales (actualmente Presidente) y Antonio Peredo (actualmente senador del MAS, partido de gobierno), de David Choquehuanca (actualmente Ministro de Relaciones Exteriores) y otros tres políticos importantes del MAS.⁸¹

En el 2008 se expulsó al DEA de Bolivia

47

En la actualidad, hay una policía especial a cargo de perseguir y desarticular a los grupos narcotraficantes: la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), con unos 1.500 efectivos. Altos funcionarios gubernamentales consideran que la FELCN es muy corrupta y, en el mejor de los casos, bastante ineficaz. La mayoría de los analistas, y también de los funcionarios gubernamentales, coinciden en que, cuando estaba presente la DEA, era mucho mayor el porcentaje de la cocaína ilegal confiscada que en los años posteriores.

La fuerza especial de la policía boliviana FELCN está corrupta y es menos eficaz que la DEA

Quizá aún más alarmante es el hecho de que el sistema judicial es bastante ineficaz y también está afectado por los sobornos y corrupción. Hasta el 1996 la legislación penal de Bolivia ni mencionaba la categoría del crimen organizado.⁸² Desde 2006, los casos de corrupción con funcionarios del sector público cobran más peso si puede establecerse una relación con los narcotraficantes.⁸³ La mayoría de los casos penales en Bolivia son contra las pandillas que asaltan bancos, residencias de la clase media alta y élite, joyerías, empresarios y transportistas de oro, etc. Los casos contra narcotraficantes son relativamente excepcionales. Muchos delincuentes encarcelados son de origen brasileño, colombiano, venezolano, e incluso algunos de ascendencia mexicana y paraguaya.

El sistema judicial es en su mayor parte ineficaz y corrupto

El sistema de justicia (y policía) como tal es altamente propenso a los sobornos y la corrupción. Los informes internos de abogados y policía concluyen que un 98% de los policías han aceptado, al menos una vez en su carrera, 'dinero para agilizar' o se les pagó para evitar multas de tránsito. Es bastante común amedrentar a los testigos en los procesos con líderes económicos y/o políticos de nivel medio y alto. Los abogados sobornan a sus colegas e incluso a los jueces. La cifra aproximada en el 2005 indica que un porcentaje relativamente considerable de los fiscales, jueces o magistrados respondían a los sobornos. Los asistentes y pasantes funcionan como intermediarios. El costo de cualquier trámite legal comienza en los 200 – 300 Bs (22€ a 33€) y fácilmente puede subir.

El Crimen Organizado y el Sistema Político

Hay otros indicadores de interferencia e infiltración en el sistema político. Entre los mediados de 2010 y principios de febrero 2011 el Amauta (sacerdote indígena) de El Alto, ciudad nueva contigua a La Paz, que en el 2006 ceremoniosamente confi-

⁸⁰ Véanse los informes diarios de 11 julio 2008 (<http://grupoapoyo.org/basn/node/2117>, consultado 1o febrero 2011).

⁸¹ Véanse los informes diarios de 8 noviembre 2008 (<http://www.fmbolivia.com.bo/noticia5183-investigacion-de-cuentas-motivo-salida-de-la-dea-del-pais.html>, consultado 1o febrero 2011, y <http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=705715>, consultado 1o febrero 2011).

⁸² Antes del reconocimiento legal e incorporación del 'crimen organizado' sólo podían procesarse las 'asociaciones delincuentes'.

⁸³ El Gobierno del MAS (2006 – presente) tiene un interés particular en la persecución legal de los altos funcionarios y dignitarios de los gobiernos anteriores (entre 2000 y 2005).

Indicadores de infiltración en el sistema político

rió a Evo Morales su cargo presidencial, fue arrestado con varios kilos de cocaína. El alcalde de Calamarca fue arrestado con cinco kilos de cocaína pura. También se han procesado con cargos de cocaína a senadores, miembros del Parlamento, oficiales de partido y familiares directos de miembros del gabinete. Los vice-ministros de pronto se convierten en propietarios de hoteles y bloques de departamentos.

En las ciudades fronterizas con Chile y Argentina, así como en El Alto y Ururu, las pandillas se disputan las rutas territoriales y arreglando sus cuentas con sus adversarios (ilegales).⁸⁴ Al final aparecen los sicarios cumpliendo estas órdenes. En algunos casos, las comunidades indígenas han atacado a la policía, linchando a algunos oficiales. En otros casos, parece que grupos enteros de comunidades indígenas están inmersas en la producción de coca y el narcotráfico.

La diferencia con países centroamericanos y Colombia es que en Bolivia no existe la violencia sistemática y el crimen organizado no está infiltrado

Es todavía pronto para hablar de un sistema de para-política en Bolivia. Sin embargo, la estructura embrionaria para establecer narco-mafias competidoras y control territorial sobre las rutas del contrabando ya está presente. Pero la diferencia con México, América Central y Colombia es precisamente la ausencia de la violencia sistémica. Quizá se pueda señalar la falta de una política nacional coherente respecto al cultivo de la coca y la lucha contra el crimen organizado, e inclusive el narcotráfico. Quizá el gobierno central muestre una actitud ambivalente hacia los cocaleros, pero no está penetrado por el crimen organizado.

Perú

Al igual que Bolivia, el Perú tiene muchos siglos de tradición en el cultivo de la coca para uso ceremonial y consumo popular (indígena) en la región serrana y los campamentos mineros. Durante muchas décadas, el Perú era el mayor productor de coca, especialmente en las laderas orientales de la cordillera de los Andes. A principios de los 80, cuando los colombianos no habían desarrollado el cultivo intensivo de coca en su interior y todavía dependían de las cosechas peruanas y bolivianas, ya dominaban el tráfico. Entonces, la ruta normal de transporte era el itinerario por el Río Amazonas entre Iquitos, capital de la Amazonia peruana, y Leticia, ciudad colombiana de tránsito, que ya era la base para los pequeños proto-carteles que se expandirían a los pocos años. Más de uno habrá oído a los oficiales de Marina con base en Iquitos, jactarse de las subidas de sus sueldos cuando hacían la vista gorda.

Durante décadas, Perú era el mayor productor de coca

Hasta mediados de los 80 la región del Alto Huallaga era considerada la mayor área productora de coca del mundo y en la actualidad es la zona más destacada en Perú. Desde mediados de los 80 hasta fines de los 90, las mafias colombianas, los grupos armados del Sendero Luminoso, los cocaleros peruanos armados, la policía y las fuerzas armadas se disputaban segmentos del control territorial.

Cultivo Legal e Ilegal de la Coca

Perú sigue siendo un productor importante. Algunos analistas consideran incluso que el Perú supera a Colombia. Durante la década de Fujimori (1990 – 2000) el ejército y el servicio de inteligencia, las manos duras de facto del gobierno Fujimori, se involucraron fuertemente en narco-alianzas con el crimen organizado. Al mismo tiempo, el Gobierno peruano colaboró con la DEA en campañas de erradicación. Montesinos, asesor de Fujimori, su asesor jurídico en los primeros años de su gobierno y al mismo tiempo controlador del sistema nacional de

En los 90 el ejército y el servicio de inteligencia estaban fuertemente involucrados en el crimen organizado

⁸⁴ De las bandas criminales en El Alto y La Paz, un 18% del liderazgo es femenino, según la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (FELCC) (*La Prensa*, 1° febrero 2011).

inteligencia, purgó a los generales y almirantes no corruptos, organizó cuadrillas de muerte e impuso las políticas de su jefe político. Un año después de que Fujimori entregara la presidencia, unos 50 almirantes y generales fueron procesados por corrupción e involucramiento en el narcotráfico.⁸⁵

Aunque la violencia siempre se ha asociado con el narcotráfico en Perú, siempre ha sido menor que en Colombia. También en Perú, los conflictos armados internos se entretrejan con la narco-economía. Las dos décadas de la macabra guerrilla del Sendero Luminoso vistió al país de luto durante 20 años, afectando principalmente a la serranía indígena. El Sendero Luminoso pudo financiar sus campañas y abastecerse de equipos militares sofisticados imponiendo impuestos y participando del negocio de la coca. No fueron los únicos actores armados. Finalmente, campañas militares ingeniosas de contrainsurgencia y en particular el hecho de que unos 400.000 grupos paramilitares indígenas, en su mayoría voluntarios (los "ronderos") entraron en acción, pusieron a los guerrilleros a la defensiva y produjeron una desarticulación casi total para fines de los 90.⁸⁶

La historia de los coccaleros peruanos es un relato cíclico de coexistencia pacífica seguida por represión local por el gobierno central. Existe un pacto silencioso y no oficial de tolerancia y no persecución, marcado por la ausencia de maltratos demasiado duros. En la década del 2000, las actividades de erradicación de la DEA se alternaron con intervenciones policíacas, marchas de protesta por los coccaleros organizados regionalmente, y la admisión de dos de sus representantes (mujeres) elegidas como parlamentarias al Congreso. Mientras tanto, las mafias colombianas están presentes en el Alto Huallaga y en otras zonas serranas andinas de cultivo. Incluso se señala que participan miembros de los carteles mexicanos en el transporte por los puertos marítimos peruanos. Se suele aceptar que una mayor parte de la coca procesada (pasta o cocaína) se transfiere hasta Bolivia para llevarla hacia Brasil, Argentina y Chile.⁸⁷

Políticas Anti-Drogas

A nivel del gobierno central no hay ninguna política coherente ni integral sobre el crimen organizado, el narcotráfico ni el cultivo de la hoja de coca. La DEA y las fuerzas policiales colaboran y la inteligencia recopilada por los EEUU se transfiere a las fuerzas de seguridad peruanas. Hasta mediados de los años 2000, la cooperación estadounidense financiaba hasta los sueldos y equipos (incluyendo los uniformes) de las fuerzas especiales de la policía.⁸⁸ Difieren las opiniones sobre las estadísticas. Según las estadísticas oficialmente publicadas, hay 38.000 ha. de cultivo de coca. La UNODC presenta una cifra aproximada global de 59.000 (2010).⁸⁹ Como ya comenté en el capítulo sobre Colombia, hay analistas que aseveran incluso que el Perú es el mayor productor de coca, con mucho más producción ilegal de la publicada.

A veces las fuerzas armadas ayudan con las operaciones anti-drogas.⁹⁰ Pero también se les implica en una campaña contrainsurgente de muy baja intensidad contra los remanentes y las columnas sucesoras recién creadas del Sendero Luminoso, que vuelven a surgir a nivel regional. El año pasado, en 2010, el número de bajas entre las fuerzas de seguridad (fuerzas armadas

Las campañas de contrainsurgencia y los grupos indígenas paramilitares llevaron a casi la destrucción de las guerrillas en los 90

La historia de los coccaleros peruanos es de una coexistencia pacífica y represión local del gobierno

No hay una política coherente o integral contra el crimen organizado, tráfico de drogas o el cultivo de hoja de coca

Las fuerzas armadas algunas veces ayudan en las operaciones antidroga

⁸⁵ Para un análisis detallado de este período, véase Kruijt y Tello (2002).

⁸⁶ Véanse para una descripción de este conflicto armado, CVR (2003, 2004) y Degregori (2010, 2011).

⁸⁷ Véase para un análisis detallado Van Dun (2009).

⁸⁸ Entrevista del autor con Fernando Rospigliosi, ex-Ministro del Interior y Presidente del sistema peruano de inteligencia, 5 enero 2005.

⁸⁹ También hay 82.000 ha. con cultivos de frutas y alimentos rotativos, según las fuentes policiales. Véase también FES (2008).

⁹⁰ Las fuerzas armadas peruanas tienen unos 40.000 (no se publica el detalle). Para una visión general reciente, véase IDL – DESCO (2009).

y policía) ascendió a 300 en estas campañas anti-Sendero. Se libran mini-guerras en la región andina entre el sur del Alto Huallaga y los valles de los Ríos Apurímac y Ene.⁹¹ De hecho, la mayor parte de la coca peruana se produce en tres zonas que antes se disputaba fuertemente las guerrillas: el Alto Huallaga (29%), la zona Apurímac – Ene (29%), y el área La Convención – Lares (22%).⁹²

La falta de una política consistente e integral sobre el cultivo de la coca y la contención del crimen organizado, en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, está visible en la presente campaña electoral presidencial y para el Congreso (febrero 2011). La mayoría de los candidatos lanzan acusaciones sobre el supuesto uso privado de drogas de sus adversarios y sus familiares. Ningún partido ha publicado su estrategia anti-drogas y anti-corrupción.⁹³

Sí, hay fiscales anti-drogas. Sí, hay una Procuraduría Anti-Drogas. En diciembre 2010 había 60.000 casos legales pendientes, 40.000 contra vendedores minoristas o transportistas menores ('mulas'). Hay unos 200 casos de blanqueo de dinero esperando su proceso. De hecho, hay un estancamiento estructural que impide la verdadera persecución a las organizaciones y grupos criminales a gran escala. Hay una unidad policíaca especial también, la Dirección Anti-Drogas (DIRANDRO), pero con poca coordinación entre las instituciones de la ley y el orden.

Pero la relación entre la cocaína producida y capturada está bastante desequilibrada: en el 2006 se confiscaron apenas 17 toneladas de un total de 280 producidas. Al año siguiente, en el 2007, esta relación fue 10 de 290. En el 2008 fueron 23 de 302 y en el 2010, de la producción estimada de 317 toneladas, tan sólo 14 toneladas fueron decomisadas. El blanqueo de dinero entre 2003 y mediados del 2010 se estimó en aproximadamente 4.393 millones \$ USA. La producción y el tráfico de la coca supone el mayor monto del circuito del blanqueo: 82%. Sólo un monto relativamente mínimo (103 millones \$ USA) se utilizó para sobornar a funcionarios.

Como se podría esperar, la capacidad del Perú para entregar cocaína de alta pureza y a bajo precio lo hace atractivo como exportador. Sólo un 12% de la cocaína peruana se envía a los mercados de consumo en los EEUU. La gran mayoría tiene como destino final a Europa y los puertos marítimos del Atlántico en el Brasil. En el Cono Sur latinoamericano (sur del Brasil, Uruguay, Argentina y Chile) se ha consolidado un mercado interno en aumento. Las rutas de exportación van hacia el sur y el este: un 43% de la cocaína peruana se transporta a través de Bolivia (en su mayoría por rutas terrestres), un 28% por el Ecuador (por sus puertos marítimos) y un 13% por Chile. Bolivia abastece al mercado de consumo de Argentina y Chile también.⁹⁴ (véase también figura 4)

La información que circula en el debate público proviene en su mayor parte de periodistas de investigación, gestionando sus pequeñas ONG o trabajando para las grandes. Algunas ONG especializadas en la vigilancia de los derechos humanos están revisando las hojas de vida de candidatos para jueces y magistrados de la Corte Suprema e instituciones similares. En la actualidad, el Presidente de la Corte Suprema es el juez que condenó al ex-dictador Fujimori.

⁹¹ La llamada región VRAE. Véase *El Comercio* de 6 y 8 febrero 2011.

⁹² Datos presentados por Rómulo Pizarro, presidente de DEVIDA, Lima, 11 febrero 2011.

⁹³ *El Comercio* de 7 febrero 2011.

⁹⁴ Datos presentados por Rómulo Pizarro, presidente de DEVIDA, Lima, 11 febrero 2011.

Las Políticas Anti-Drogas de Represión y Prevención

Este estudio se refiere a las relaciones entre el crimen organizado, el narcotráfico y el sistema político en América Latina, concentrándose en los tres países productores de coca / cocaína (Colombia, Perú y Bolivia) y sus vínculos con América Central y México, las principales rutas de transición hacia los EEUU. También hicimos un inventario de las cifras aproximadas más recientes sobre las rutas hacia la Unión Europea, por los puertos del Atlántico en Sudamérica y África Occidental.

El crimen organizado y especialmente la narco-economía se relacionan con al menos cuatro ámbitos de actividades. Éstos son:⁹⁵

- La producción, el transporte y las cadenas de distribución, hasta las ventas pequeñas en las calles de los mercados de consumo;
- El proceso del blanqueo de dinero⁹⁶;
- El tráfico en armas ligeras;
- La infiltración en el sistema político y el proceso consiguiente de corrupción, impunidad y violencia.

Esta contribución es un estudio sobre el crimen organizado y el Estado en la región latinoamericana y del Caribe, lo que casi nos hace olvidar que los EEUU y la UE también se enfrentan a sus problemas internos con el crimen organizado. Un análisis riguroso de la criminalidad y los mercados de cocaína en los EEUU y Europa, y las (múltiples) relaciones entre las hampas, mafias y los sistemas políticos estadounidense y europeo probablemente es tan importante como este estudio que se enfoca solamente en el lado de los productores y traficantes y las consecuencias internas de la violencia y la distorsión política en América Latina.

Las estrategias contra las drogas en la región tienen un parecido con las acciones contrainsurgentes más o menos clásicas durante las guerras civiles y las campañas anti-guerrilla desde los años 60 hasta los 80, principalmente bajo regímenes militares. Por supuesto que también hay claras diferencias: anteriormente, los movimientos guerrilleros fueron organizaciones político-militares, con el énfasis en el liderazgo político, la ideología política y los fines políticos de derrocar la dictadura y vencer al imperialismo. En América Central estos movimientos también tuvieron una fuerte inspiración religiosa, de la Teología de la Liberación. En la actualidad, la confrontación es con otro tipo de organizaciones: organizaciones económico-militares, que no pretenden tumbar al Estado sino ampliar su porción del excedente económico fácil, logrado por una combinación específica de violencia y corrupción, por las buenas (corrompiendo a las

El cambio de organizaciones político-militares a organizaciones económico-militares

⁹⁵ Brombacher y Maihold (2009) y Maihold y Brombacher (2009). Véanse también Dreyfus (2009), Mathieu y Rodríguez Arredondo (2009) y Mathieu y Niño Guarnizo (2010).

⁹⁶ Véase Blickman (2009).

autoridades) o por las malas (pistolas y pandillas). La estrategia es controlar los territorios o corredores que abren el espacio para la producción y el tráfico que garantizan el lucro ininterrumpido.

Su objetivo final no es la captura del Estado. El objetivo máximo es el excedente, la 'buena vida' y la perspectiva de incorporarse a los segmentos de la élite. El mejor ejemplo se aprecia en el liderazgo de las fuerzas paramilitares colombianas: blanquearon la mayor parte de sus abundantes ganancias en compras semi-legales de terrenos y haciendas, transformándose en una nueva clase de empresarios agrarios y nobles. Cuando buscaron (y adquirieron) alianzas políticas fue para crear una reserva de políticos domesticados, más por el interés en la impunidad y consolidar las estructuras de corrupción que en la influencia política directa o en establecer 'narco-Estados'.

Durante los últimos 25 años, se han modificado el tamaño, el carácter, los vínculos y las estructuras de comunicación entre estas organizaciones económico-militares. Los grandes súper-carteles de Medellín y Cali se quebrantaron en los años 1980 y 1990. Surgieron carteles más pequeños, más sólidos, ágiles y agresivos. Aunque todos los grupos del crimen organizado tienen sus 'brazos militares', para imponer sus deseos con la posibilidad de la violencia, los grupos están más esparcidos, más interconectados, más propensos a formar alianzas parciales con la competencia y librar guerras breves sobre las rutas y los corredores.

En muchos países el término es la 'mafia': mafias brasileñas, mafias colombianas, mafias venezolanas. Tan sólo en México hay carteles fuertes y reconocibles establecidos. En muchos otros países, hay una transformación relativa de mini-ejércitos militarizados en pandillas juveniles, bandas criminales, y milicias locales territoriales. Con toda certeza, se está transnacionalizando el crimen organizado, pero los vínculos entre las muchas cadenas son múltiples y no hay una organización mundial monstruosamente enorme, con capacidad superior de planificación y estrategias a largo plazo, recursos financieros y grandes instalaciones de entrenamiento.

En los países como Bolivia y Perú, los cocaceros son indígenas, pobres y relativamente desorganizados. Entregan a traficantes locales que operan a veces en convoys hasta los embarques transfronterizos hasta el siguiente país de la ruta. En Guatemala y en Honduras, los jefes locales se ven como protectores, como los nuevos representantes del imperio de la ley, como benefactores. Proporcionan empleo en regiones donde el Estado no está representado o sólo se hace presente en forma de instituciones represivas.

Un Informe Presidencial

En el 2009 se publicó un importante informe gracias al esfuerzo de tres antiguos presidentes latinoamericanos: Gaviria (Colombia), Zedillo (México) y Cardoso (Brasil).⁹⁷ Se refieren a la "traumática experiencia colombiana", tratando de formular aprendizajes del 'error de seguir las políticas prohibitivas de los Estados Unidos (...) estrategia fundamentalmente represiva [que] fracasó en América Latina". Realizan una comparación muy pertinente entre dos grupos diferentes de enfoques políticos: los fuertemente represivos (EEUU) y los que

⁹⁷ Gaviria, Zedillo y Cardoso et al. (2009).

El objetivo no es capturar al estado sino conseguir excedente: una 'buena vida'.

Minicarteles más pequeños, flexibles y despiadados

Organizaciones criminales transnacionales

se orientan más hacia la prevención e intervención de salud pública en la Unión Europea.⁹⁸ El informe resume las consecuencias negativas del enfoque orientado hacia la represión:

- La consolidación de una economía ilícita dominada por el crimen organizado;
- La pérdida de grandes segmentos del presupuesto público gastado en la seguridad en vez de en salud pública;
- La reubicación continua de la producción en nuevas zonas debido a la represión y violencia locales;
- La estigmatización de los pequeños productores y consumidores y la criminalización de la población local en las zonas de producción, transformándolos en rehenes de las hampas; y
- La generación de sistemas locales de violencia y represión que distorsionan y corrompen el carácter de la democracia nacional.

Dos enfoques políticos diferentes: represión (EEUU) y prevención (UE)

53

Represión y Prevención

¿Será que el 'enfoque de la guerra' es la mejor solución? Pocos analistas negarán la necesidad de operaciones anti-drogas. Sin embargo, el punto clave es que, en general, las fuerzas armadas están menos contaminadas que la policía, que en la mayoría de los países analizados en este informe, eran el eslabón más débil, los más propensos a la corrupción y los más infiltrados por el delito y las organizaciones criminales. ¿Cómo se puede operar con un ejército más o menos honrado, una policía corrupta, un sistema judicial ineficaz, un sistema penitenciario inadecuado, un sector público civil propenso a la corrupción y presente a medias que no ofrece oportunidades a la población para el empleo ni el acceso a servicios sociales básicos? En términos del enfoque anti-drogas, ¿cuáles son los elementos básicos que deben incorporarse o deben recibir el apoyo externo (de donantes)?

Éste puede ser uno de los puntos más débiles en las actuales estrategias anti-drogas: ¿Cuál es el punto de equilibrio adecuado entre prevención y represión, entre un Estado brinda que ofrece prestaciones, y un Estado que reprime y castiga? En los países como Colombia y México (los dos países que son más famosos por su amistad con los EEUU) la estrategia anti-drogas se elabora casi forzosamente en términos de operaciones militares y policíacas, como 'guerra' y 're-conquista'. Los niveles de violencia, crimen, pero también de sufrimiento humano, son extremadamente altos.⁹⁹ Los agricultores indígenas, procesadores campesinos, y pequeños traficantes son considerados como a criminales. La relativa tolerancia en Bolivia y Perú hacia los cocaceros, los pequeños productores y traficantes, tiene al menos el beneficio de la ausencia de las formas más brutales de la violencia. La diferencia en violencia y crimen entre los triángulos norte y sur de América Central es otro fenómeno que podría alentar reflexiones más profundas sobre la conveniencia o no de las estrategias anti-drogas fuertemente militarizadas.

Equilibrio entre la prevención y la represión: un Estado que cumple y un Estado que reprime y castiga

⁹⁸ Véanse EMCDDA (2009a, 2009b) y Comisión Europea (2008).

⁹⁹ Véase también Youngers y Rosin (2005). Y véanse los comentarios de Benítez (2010c: 6-7).

Recomendaciones

La democracia se fundamenta en las instituciones públicas que funcionan bien y los partidos políticos con un prestigio bien ganado. Cuando las organizaciones criminales se infiltran en el sistema político, esto afecta a las instituciones públicas y también a los partidos políticos, particularmente en su posición más débil: a nivel local, municipal y regional. Allí, los sueldos son más bajos. En general, a un nivel más central, las posibilidades de control son mejores, las agencias de prensa y noticieras tienen una clara presencia, y los recursos institucionales de mejor calidad más cerca.

Las organizaciones criminales afectan a las instituciones públicas y los partidos políticos en su posición más débil: a nivel local

En cuanto a una comparación estratégica entre los esfuerzos institucionales y las mejores prácticas, hay algunas medidas que podrían tomarse:

- Estudios comparados sobre las circunstancias de los programas de desarrollo alternativos que han tenido éxito. ¿En qué lograron ciertos resultados aunque fueran mínimos? ¿Qué factores e intervenciones fueron favorables? Si las intervenciones han tenido éxito en la región boliviana de Chapare, ¿qué circunstancias se podrían replicar?
- Intervenciones anti-drogas estratégicas: ¿Por qué tuvieron éxito? ¿qué circunstancias se podrían replicar? ¿Cuál fue la mezcla entre los elementos preventivos y represivos? ¿Hay instrumentos penitenciarios específicos que puedan aplicarse en otras circunstancias para que los ex-criminales se reintegren a la sociedad?
- Aunque la evaluación global de los programas de re-socialización de la Alta Consejería para la Reintegración en Colombia no fue muy satisfactoria, al menos el programa paralelo de pacto local de desarme y re-socialización en Medellín sí funcionó bien durante varios años. ¿Sería que, al tener las personas en las organizaciones criminales (grupos paramilitares, frentes guerrilleros infestados con las drogas) la alternativa legal de desmovilizarse (en presencia de una autoridad del ejército o la policía, una autoridad religiosa o del sector público), esto les dio al menos una salida mínima hacia una forma de vida alternativa?
- Podría ser útil también un análisis serio de costos y beneficios de la tolerancia relativa. Las despenalización de los cocaceros, y considerar también descriminalizar a los pequeños productores. Una vigilancia comunitaria, con el apoyo explícito de las comunidades locales, también podría ser un instrumento exitoso. La policía nicaragüense, operando en un país que tiene las mismas condiciones de pobreza, exclusión, traumas de la guerra civil y décadas de abandono que sus tres vecinos al norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), tiene antecedentes positivos en su gestión del delito y prevención de la violencia a nivel local. ¿Podrían replicarse estas experiencias?

- Un análisis comparado de las redes criminales también será beneficioso.¹⁰⁰ Es extraño decir que no hay, en la actualidad, estudios académicos pertinentes que comparen los puntos fuertes y débiles y las varias modalidades de operación entre los grupos del crimen organizado en los países productores, de la ruta del transporte y consumidores. Hasta el presente, existen algunos mitos sobre el poder todopoderoso y amenazador de una especie de conspiración organizada a nivel mundial. Subestimar al enemigo es un gran error. Sin embargo, sobre-estimar el poder del crimen organizado como si fuera una especie de potencia competidora, genera la misma situación ineficaz de un análisis exagerado de la amenaza y reacción represiva exagerada.
- El apoyo estratégico para las instituciones clave es útil en el sentido de apoyar cuándo sea necesario, y dónde haga falta. En la mayoría de los países que estudiamos en esta investigación, la policía constituye el eslabón más débil, más expuesto a la corrupción y a la cooperación silenciosa con las actividades criminales. Muchos donantes piensan en la concienciación o en una capacitación especial para la policía en estas circunstancias. Podría ser mejor establecer ciertos códigos institucionales y reforzar la motivación del espíritu de cuerpo, factor que parece que funciona mejor en el ámbito de las fuerzas armadas.
- Muchos países (por ejemplo Argentina y Perú, antes Bolivia, e incluso México y muchos países centroamericanos) dependen de la entrega de equipos para la inteligencia como intervención telefónica, datos de satélite, e interferencia del correo electrónico de fuentes externas (o estadounidenses) Asociadas con la DEA, la CIA, la DIA y el FBI. En otros países (Guatemala, probablemente Honduras también) la tecnología nacional de inteligencia está predominantemente en manos de las fuerzas militares o la seguridad privada. ¿Existe una mejor solución?

Otro conjunto de comparaciones y panoramas podría ser útil también. Sin perder el equilibrio ya mencionado entre los elementos represivos y preventivos de la estrategia global, podría ser útil realizar un análisis en serio de causas y consecuencias en una serie de situaciones posibles, preguntando “¿qué pasaría si ...” –situación? Se podrían analizar por ejemplo:

- Situaciones que consideren los efectos a corto, medio y largo plazo de la des-criminalización y des-persecución de las actividades (desde la producción por el tráfico y hasta el consumo final) dentro de toda la cadena de cultivo y consumo de la coca.
- Situaciones que pongan en efecto la completa legalización o legalización a medias (como en el caso de Bolivia y Perú) de la pequeña producción y varias formas de transformación industrial de la hoja de coca.
- Situaciones derivadas de la pactación local o regional con las hampas criminales y los posibles costos y efectos de la (parcial) re-socialización de los perpetradores, como en Medellín en los 1990 y 2000. Aquí uno también podría tomar en consideración los efectos de las desmovilizaciones de las organizaciones guerrilleras centroamericanas en los 80 y 90, de los Contras nicaragüenses en los 80 y 90, el proceso en el sur de México de negociación en el caso del movimiento zapatista y la posterior des-paramilitarización de Chiapas y los Estados contiguos. Una re-evaluación del proceso de

¹⁰⁰ Véanse también Garzón (2008) y Garay-Salamanca, Salcedo-Albarán y De León-Beltrán (2010).

desmovilización de las fuerzas guerrilleras colombianas a fines de los 80 y principios de los 90 también podría ayudar. Además se recomienda encarecidamente una revisión detallada del proceso de desmovilización colectiva en Colombia entre 2003 y 2007 y sus consecuencias posteriores.

- Situaciones en las que se vete a candidatos políticos, jueces o altos políticos y miembros del sector público como las iniciativas introducidas en Colombia y Perú que merecieron la pena.
- Un estudio especial podría hacerse del caso de Nicaragua, país con todas las características que hacen tan vulnerables los tres países del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras). La diferencia está, entre otros factores, en la cultura interna y organización de la policía nicaragüense, conjuntamente con la institución armada, con ambas instituciones clave en un sistema de imperio de la ley y el orden que funciona relativamente bien y se aprecia públicamente.
- Finalmente, recomendamos un análisis profundo de los mecanismos de la seguridad pública y la ausencia de actores de la violencia sistémica. También se recomienda apoyar un análisis comparado en aglomeraciones metropolitanas latinoamericanas como Bogotá, La Habana, Lima Metropolitana, Montevideo y Santiago de Chile.

Finalmente, hay que apoyar a los partidos políticos para que puedan adquirir una situación certificable de respetabilidad y transparencia:

- Campañas de transparencia en asuntos del financiamiento de las campañas electorales para que puedan supervisarse. En algunos países latinoamericanos (Argentina, Brasil) hay códigos de conducta y límites establecidos para el financiamiento privado de las campañas.
- Hay instituciones de revisión previa (el Instituto de Defensa Legal en Lima es un ejemplo) que filtran las hojas de vida de prominentes políticos y futuros magistrados para detectar alguna relación con el crimen organizado o con grupos empresariales sospechosos.
- La mayoría de los partidos carece de un sistema interno de alerta temprana contra la infiltración e impunidad de sus líderes políticos.
- Hay una nueva generación a la que habrá que apoyar: organizaciones juveniles y estudiantes con miras políticas, futuros miembros de las nuevas generaciones políticas.

Sin embargo, la recomendación final y más pertinente es que la formulación y ejecución de las agendas de seguridad, con su complejo equilibrio de ingredientes preventivos y represivos, no es asunto para los expertos militares especializados ni las instituciones de seguridad. Por el contrario, es un asunto de la máxima prioridad para los partidos y organizaciones políticas. Un ingrediente necesario de estas políticas es un sistema fiscal apropiado. Muchos de los países afectados en esta región, destacando Guatemala, tiene unos porcentajes de impuestos relativamente bajos y unas políticas relajadas de recaudación.

Es la política, y no el sistema militar, ni la policía, la que debe determinar el peso relativo de los programas preventivos y las acciones represivas de la lucha antidrogas. Este autor está firmemente convencido de que la participación militar y

Hace falta un sistema fiscal apropiado para realizar las agendas de seguridad

La prioridad de los partidos políticos debería ser la redacción e implementación de una agenda de seguridad

policíaca y las prioridades del sector judicial y el sistema penitenciario necesitan someterse al debate público y así formular las prioridades políticas para que las autoridades civiles puedan tomar las decisiones acertadas.

Los donantes internacionales deberían ofrecer espacios para el debate y la discusión y facilitar un análisis serio

Es posible también que esto implique un cierto cambio en las prioridades de instituciones donantes especializadas como el NIMD o IDEA: para proveer los elementos del debate y la discusión, facilitando las conclusiones de los aprendizajes, del análisis serio de las causas y consecuencias, de las políticas implícitas y explícitas, de las ventajas y desventajas. Esto requiere un serio estudio comparado de los procesos y políticas, del apoyo a los políticos, nacionales y locales.

Asistencia en una posible legislación

Implica además apoyar la posible legislación y en formular los códigos de conducta internos en temas de seguridad y los recursos de la infraestructura social y económica básica en las regiones más periféricas y las zonas de conflicto. En última instancia, esto supone mucha más atención a las políticas integrales; considerándose los efectos a corto y largo plazo de las operaciones de seguridad y las agendas del desarrollo democrático como ingredientes absolutamente necesarios de las políticas del desarrollo nacional.

Lista de Siglas y Expresiones

ACR Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (Colombia)

ADHAG Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala

Alto Huallaga Región donde se cultiva la coca (Perú)

Amauta Sacerdote indígena (Serranía Andina)

Amigos dos Amigos Asociación de crimen organizado con base en las favelas de Río de Janeiro

AUC Autodefensas Unidas de Colombia (fuerzas paramilitares)

CACIF Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Guatemala)

CASEDE Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (México)

Cato Área rectangular de 40 x 40 metros para el cultivo (legal) de coca (Bolivia)

CEDOH Centro de Documentación de Honduras

CEH Comisión del Esclarecimiento Histórico (Guatemala)

CIA Agencia Central de Inteligencia (EEUU)

CICIG Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

CIC Centro para la Cooperación Internacional (Universidad de Nueva York)

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (México)

CISAN Centro de Investigación sobre América del Norte (UNAM, México)

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

CNRR Comisión Nacional de Reparación y Reconstrucción (Colombia)

CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública (El Salvador)

Cocaleros Campesinos/as que cultivan coca (región andina)

Comando Vermelho Asociación de crimen organizado con base en las favelas de Río de Janeiro

CONALTID Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Droga (Bolivia)

CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú)

DEA Administración de Drogas y Narcóticos (EEUU)

Defensoría Defensoría del Pueblo, Oficina nacional de derechos humanos (Colombia)

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Perú)

DIA Agencia de Inteligencia para la Defensa (EEUU)

DIGCOIN Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (Bolivia)

DIRANDRO Dirección Anti-Drogas de la Policía del Perú

PEA Población Económicamente Activa

ELN Ejército de Liberación Nacional de Colombia

EMCDDA Centro Europeo para el Monitoreo de las Drogas y la Drogadicción (Portugal)

FAR Fuerzas Armadas Rebeldes (Guatemala)

FARC – EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (conocidas generalmente como las FARC)

FUBODEM Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria

FBI Buró Federal de Investigación (EEUU)

FELCN Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Bolivia)

FES Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Alemania)

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (13 Estados Miembros en América Latina)

FRIDE Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (España)

FUNDAUNGO Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (El Salvador)

FUNDESA Fundación para el Desarrollo de Guatemala

PIB Producto interno bruto

GECC Grupo Especial de Control de Coca (Bolivia)

IDEA Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Suecia)

IDL Instituto de Defensa Legal (Perú)

IEP Instituto de Estudios Peruanos (Perú)

IEEPP Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Nicaragua)

IESE Instituto de Estudios Sociales y Económicos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de San Simón (Cochabamba, Bolivia)

Iniciativa Mérida Programa de apoyo estadounidense para la acción policial en materia de estupefacientes en México (y en América Central) (también se conoce como el Plan Mérida)

Kaibiles Fuerzas especiales de la institución armada guatemalteca

LGBT Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero

MAPP – OEA Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos.

MAS Movimiento al Socialismo (Bolivia)

Maras Pandillas juveniles que usan explícitamente la violencia, logrando el control sobre pequeñas zonas territoriales urbanas y extorsionando a taxistas y empresarios locales, cuyos miembros se llaman mareros

MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivia)

NIMD Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria

OEA Organización de Estados Americanos

OASIS Organización de Apoyo a Una Sexualidad Integral Frente al SIDA (Guatemala)

OSI Open Society Institute

PAN Partido Acción Nacional (México), de derecha, a partir del 2000 el partido del Gobierno Federal

Pandillas Término genérico para agrupaciones callejeras de jóvenes, no necesariamente criminalizadas

Para-políticos Políticos amansados y corruptos que ayudan al crimen organizado (el término se utilizaba para los para-militares en Colombia, y se ha convertido desde entonces en una expresión genérica)

PCC Primeiro Comando da Capital, asociación de crimen organizado con base en las favelas de São Paulo

PDA Polo Democrático Alternativo (Colombia)

PDDH Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (El Salvador)

PDR Partido de la Revolución Democrática (México), de izquierda, partido de gobierno de la Ciudad de México

Plan Colombia Programa de apoyo estadounidense a la acción policiaca en materia de estupefacientes en Colombia (con varios nombres diferentes)

PDH Procuraduría de los Derechos Humanos (Guatemala)

Personería (Municipal, Departamental y Nacional) Oficinas para la defensa de los derechos humanos (individuales) (Colombia)

PIEB Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (Bolivia)

Procuraduría Procuraduría General de la Nación, oficina del defensor del pueblo que supervisa a todo el sector público (Colombia)

Procuraduría Anti-Drogas Oficina del Fiscal Anti Drogas (Perú)

PRI Partido Revolucionario Institucional (México), entre fines de los 1920 y el 2000 la fórmula unipartidista mexicana, posteriormente un partido centrista

PUCP Universidad Católica del Perú

RESDAL Red de Seguridad y de Defensa de América Latina (sede en Argentina)

RNW Radio Nederland Worldwide

Ronderos Fuerzas paramilitares contrainsurgentes indígenas (voluntarias) durante las campañas contra el Sendero Luminoso (Perú)

SAT Sistema de Alerta Temprana (incorporado en la Defensoría, Colombia)

Sendero Luminoso Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui (movimiento guerrillero maoísta, Perú)

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

Sicarios Asesinos a sueldo

SWP Fundación Stiftung Wissenschaft und Politik (Alemania)

Terceiro Comando Asociación de crimen organizado con base en las favelas de Río de Janeiro

UCA Universidad Centroamericana (El Salvador, Nicaragua)

UIF Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos (Bolivia)

UNAH Universidad Nacional
Autónoma de Honduras

UNAM Universidad Nacional
Autónoma de México

PNUD Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

ACNUR Oficina de las Naciones
Unidas del Alto Comisionado para los
Refugiados/as

UNODC Oficina de las Naciones
Unidas Contra la Droga y el Delito

USAID Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional

VRAE Región del Apurímac – Ene
(zona cocalera, Perú)

WOLA Oficina de Washington sobre
América Latina

Zapatistas Movimiento guerrillero
en los Estados del sur de México
(principalmente en Chiapas)

Lista de Entrevistas¹⁰¹

Sábado 17 abril 2010

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Guatemala, entrevista con

–Edmundo Urutia, Investigador
Principal y ex-Secretario de Análisis Estratégico (2004 – 2006)

Viernes 25 junio 2010

Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), San Salvador, entrevista con

–Aída Luz Santos de Escobar, Presidenta
–Oscar Morales, Director Ejecutivo

Martes 6 julio 2010

Radio Nederland Worldwide (RNW), Hilversum, Países Bajos, entrevista con

Carlos Flores, Profesor Asociado, Centro para el Desarrollo, Universidad de Oslo

–Ivan Briscoe, Investigador Principal, Instituto Neerlandés de Relaciones Internacionales Clingendael, Unidad de Investigación de Conflictos, La Haya

Martes 20 julio 2010

Fundación Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlín, entrevista con

–Guenther Mailhold, Subdirector,
–Daniel Brombacher, Investigador

Miércoles 21 julio 2010

Lateinamerika Institut, Freie Universität Berlín, entrevista con

–Marianne Braig, Profesora Politikwissenschaft
–Arturo Alvarado, Profesor Investigador Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México

Viernes 1° octubre 2010

La Paz, Bolivia, entrevista con

–Raúl Prada, Viceministro de Planificación Estratégica

Lunes 4 octubre 2010

Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), La Paz, entrevista con

–Godofredo Sandoval, Director Ejecutivo

Lunes 18 octubre 2010

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa, entrevista con

–Leticia Salomón, Directora General de Investigación y Profesora de Sociología Militar

Domingo 24 octubre 2010

Secretaría del Interior y Justicia, Tegucigalpa, entrevista con

–África Madrid, Secretario del Interior y Justicia

Miércoles 1° diciembre 2010

Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Guatemala, entrevista con

–María Eugenia Morales Aceña de Sierra, Procuradora Adjunta I

Jueves 2 diciembre 2010

Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Guatemala, entrevista con

–Aníbal Gutiérrez, asesor político

Martes 26 y miércoles 27 octubre 2010, Domingo 5 diciembre 2010

Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Tegucigalpa, entrevista con

–Victor Meza, ex-Secretario del Interior y Justicia (2006 – 2009) y director CEDOH

Jueves 9 diciembre 2010

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Guatemala, entrevista con

–Manolo Vela, investigador principal

Jueves 9 diciembre 2010

Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), entrevista con

–Edgar Heinemann, Presidente y ex-Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)
–Juan Carlos Zapata, Gerente General FUNDESA

Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 enero 2011

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, entrevista con

–Raúl Benítez Manaut, Investigador y Profesor de Estudios de la Seguridad, Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM y Director Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE)

Sábado 27 noviembre 2010,

Sábado 22 enero 2011

Guatemala, entrevista con

–Julio Balconi, ex-Secretario de Defensa (1997 – 1998), ex-Coordinador del Gabinete de Seguridad (2006 – 2008) y actualmente Asesor en Seguridad Nacional, Inspectoría Nacional del Sector Público

Sábado 22 febrero 2011

Diario La Prensa, Guatemala, entrevista con

–Martin Rodríguez Pellecer, Periodista Investigador y Director, periódico electrónico Diario Plaza Pública

¹⁰¹ Varias entrevistas incluidas en el presente documento fueron realizadas en el contexto del Proyecto de la Fundación Neerlandesa para la Investigación Científica, 2010/04671/WOTR "La Transformación del Conflicto Étnico: de Movimientos Guerrilleros Indígenas a Partidos Políticos", o durante otras misiones sobre las políticas a América Central, antes de esta misión de campo.

Domingo 23 enero 2011*Guatemala, entrevista con*

–Miguel Canessa, Profesor de Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Domingo 23 enero 2011*Organización de Apoyo a Una Sexualidad Integral frente al SIDA (OASIS), Guatemala, entrevista con*

–Jorge López Sologaitoa, director ejecutivo

Lunes 24 enero 2011*Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidista, Guatemala, entrevista con*

–Doris Cruz, Representante

Lunes 24 enero 2011*Guatemala, entrevista con*

–Héctor Rosada – Granados, ex-Negociador de Paz y Miembro del Gabinete (1993 – 1995) y actualmente analista político y de seguridad

Lunes 29 noviembre 2010 y**Lunes 24 enero 2011***Guatemala, entrevista con*

–Gustavo Porras, ex-Negociador de Paz (1996) y Miembro del Gabinete (1996 – 2000), actualmente analista político y de seguridad

Lunes 24 enero 2011*Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Guatemala, entrevista con*

–Edelberto Torres – Rivas, co-autor del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH 1999) y Coordinador del Informe PNUD 2010 sobre Guatemala

Martes 25 enero 2011 y**miércoles 26 enero 2011***Comisión Nacional de Reparación y Reconstrucción (CNR), Bogotá, entrevista con*

–Andrea Gómez Ruiz, asesora principal sobre Desarme, Desmovilización y Re-integración

Miércoles 26 enero 2011*Bogotá, entrevista con*

–Francisco Leal Buitrago, profesor honorífico y ex-Rector la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes

Miércoles 26 enero 2011*Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Bogotá, entrevista con*

–Alejo Vargas, profesor y Director del Grupo de Investigación sobre la Seguridad y Defensa
–Carlos Medina, profesor y Vice-Director del Grupo de Investigación sobre la Seguridad y Defensa

Jueves 27 enero 2011*Universidad del Rosario, Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, Bogotá, entrevista con*

–Roddy Brett, Profesor de Sociología
–Éric Lair, Profesor de Derecho Casuístico

Jueves 27 enero 2011*Bogotá, almuerzo de trabajo con*

–Javier Ciurlitza, Director, Grupo de Crisis Internacionales, división de América Latina
–Denise Cook, Asesora en Paz y Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Colombia

Jueves 27 enero 2011*Bogotá, entrevista con*

–Angélica Durán-Martínez, Investigadora, Universidad Brown

Viernes 28 enero 2011*Defensoría del Pueblo/Ministerio Público, Bogotá, Sistema de Alertas Tempranas (SAT), entrevista con*

–Jorge Enrique Calero Chocón, Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil y Director del SAT
–Claudia Rojas, Analista Nacional (Región Nor-occidental)
–Luis Pérez, Analista Nacional (Región Sur-Oriente)

Viernes 28 enero 2011*Embajada del Reino de los Países Bajos, Bogotá, entrevista con*

–Harman Idema, Ministro Consejero y Jefe de Cooperación

Sábado 29 enero 2011*Acción Andina Colombia – Instituto Transnacional, Bogotá, entrevista con*

–Ricardo Vargas, Director

Lunes 31 enero 2011*Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FUBODEM), La Paz, entrevista con*

–Guido Riveros Franck, Director Ejecutivo,
–Hugo Moldiz Mercado, Coordinador Político,
–Jorge Durón Fernández, Director de Investigación y Formación

Lunes 31 enero 2011*Diario La Razón, La Paz, entrevista con*

–Claudia Benavente, Directora
–Miguel Melendre, Periodista Investigador

Lunes 31 enero 2011*Diario Página Siete, La Paz, entrevista con*

–Raúl Peñaranda Undurraga, Director

Lunes 31 enero 2011*Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN), La Paz, entrevista con*

–Coronel de la Policía Nacional Luis Cutipa Salva, Director

Lunes 31 enero 2011*Programa para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), La Paz, entrevista con*

–Godofredo Sandoval, Director

Martes 1 febrero 2011*La Paz, entrevista con*

–Ramiro Rivas Montealegre, Investigador, Universidad de Salamanca, España, ex-Director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Superintendencia de Bancos

Martes 1 febrero 2011*Nueva Frontera, La Paz, entrevista con*

–Carlos Hugo Laruta, Coordinador Político del Partido Unidad Nacional en El Alto

Martes 1 febrero 2011*Estrategias y Alternativas, La Paz, entrevista con*

–Aulalia Zurita Zelada, Abogada y ex-Fiscal General del Distrito de La Paz

Miércoles 2 febrero 2011

Embajada de los Países Bajos, La Paz, entrevista con

- To Tjoelker, Ministro Consejero y Jefe de Cooperación
- Gary Montaña, asesor para la Unidad de Cooperación

Miércoles 2 febrero 2011

Archivo Histórico de la Nación, La Paz, entrevista con

- Rosana Barrigán, Directora

Miércoles 2 febrero 2011

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y Estado Plurinacional de Bolivia (UNODC), La Paz, entrevista con

- Carlos Díaz, Residente Adjunto

Miércoles 2 febrero 2011

La Paz, entrevista con

- George Gray Molina, Director Instituto Alternativo e Investigador, Universidad Princeton

Jueves 3 febrero 2011

(vuelo de La Paz a Cochabamba), conversación breve con

- Sergio Loayza, Vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS)

Jueves 3 febrero 2011

Universidad de San Simón, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE), Cochabamba, entrevista con

- Fernando Salazar Ortuño, docente investigador

Jueves 3 febrero 2011

Viaje en automóvil con Katyuska Vásquez (periodista investigadora del Diario *Los Tiempos*) cruzando por los asentamientos pobres alrededor de Cochabamba

Jueves 3 febrero 2011

Santa Cruz, entrevista con

- Roger Cortez-Hurtado, Profesor de Sociología Universidad Mayor de San Andrés, La Paz

Jueves 3 febrero 2011

Santa Cruz, entrevista con

- Ernesto Justiciano Urenda, Director, diario digital EJU.TV, ex-Viceministro de Lucha contra el Narcotráfico (2001

– 2003) y ex-Miembro de Parlamento (2006 – 2010)

Viernes 4 febrero 2011

La Paz, entrevista con

- Tellería Escobar, Loretta, Asesora, Ministerio de Defensa de Bolivia

Domingo 6 febrero 2011

Lima, entrevista con

- María del Pilar Tello, ex-Directora de Editora Perú (editorial del Gobierno peruano del Diario El Peruano y Agencia de Noticias Andina)

Domingo 6 febrero 2011

Lima, entrevista con

- Walter Navarro, asesor, Ministerio del Interior

Domingo 6 febrero 2011

Lima, entrevista con

- Francisco Huanacune Rosas, Director, diario electrónico Generación.com y Candidato para el Parlamento Andino.

Lunes 7 febrero 2011

–Instituto de Defensa Legal (IDL), Departamento de Seguridad, Justicia y Sociedad, Lima, entrevista con

- Ana María, Directora del Departamento

José Robles Montoya, Analista Principal

Martes 8 febrero 2011

Lima, entrevista con

- Carlos Iván Degregori, director principal de los Informes de la Comisión Peruana de Verdad y Conciliación (2001 – 2005) y ex-Director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Martes 8 febrero 2011

Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Lima, entrevista con

- Rosa Vera Solano, Investigadora (seguridad y fuerzas del orden) (IEP)

Martes 8 febrero hasta el

Jueves 10 febrero 2011

Fundaciones Universidad de Nueva York – IDEA – Open Society – NIMD, Lima, Seminario “Diálogo Interregional sobre el Crimen Organizado y la Captura del Estado (discurso de apertura y participante)

Viernes 11 febrero 2011

Seminario IDEA “El crimen organizado y las Drogas en el Perú. Señales de un nuevo movimiento” (participante), Lima, presentación por Rómulo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas; presentación por Gustavo Preto, ex-candidato presidencial (2010) del Polo Democrático Alternativo (PDA), Colombia

Bibliografía

- Acevedo, Carlos. *Los costos económicos de la violencia en Centroamérica*. San Salvador: Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador (2008). http://www.ocavi.com/docs_files-file_538.pdf (consultado 24 Junio 2010).
- ADHAG (1998), *Guatemala nunca más*. Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (4 vols).
- Andrade Martínez – Guerra, Gustavo. *Los caminos a la violencia. Vinculación y trayectorias de los niños en los grupos armados ilegales en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales – CESO, 2010.
- Aranda Terrones, Jesús. ' "War" on Drug', en RESDAL. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean – 2010 Edition*. Buenos Aires: Red de seguridad y de defensa de América Latina, 2010, pp. 252 – 253.
- Arango, Carlos, Martha Misas y Enrique López. 'Economía subterránea en Colombia 1976–2003: Una medición a partir de la demanda de efecto', *Ensayos sobre Política Económica* # 50, Junio 2006, pp. 155–212.
- Arias, Enrique Desmond. *Drug and Democracy in Rio de Janeiro. Trafficking, Social Networks and Public Security*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2006.
- Ávila Martínez, Ariel Fernando. 'Ingeniería política de los grupos armados ilegales', en Claudia López Hernández, ed. Y refundaron la patria ... *De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris and Random House Mondadori, 2010, pp. 79 – 213.
- Bagley, Bruce y Aline Hernández. 'Crimen organizado en México y sus vínculos con Estados Unidos', en Hans Mathieu and Catalina Niño Guarnizo, eds. *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. Anuario 2010. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010, pp. 328 – 378.
- Benítez Manaut, Raúl. 'Organized Crime and National Security in Mexico', en Francisco E. Thoumi et al. *The Impact or Organised Crime on Democratic Governance in Latin America*. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung – Departamento para América Latina y el Caribe, 2010a, pp. 4 – 12.
- Benítez Manaut, Raúl, ed. *Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones México – Estados Unidos*. México DF: Colectivo de Análisis de La Seguridad con Democracia (CASEDE), 2010b.
- Benítez Manaut, Raúl. 'México 2010. Crimen organizado, seguridad nacional y geopolítica', en Raúl Benítez Manaut, ed. *Crimen organizado e Iniciativa Mérida en las relaciones México – Estados Unidos*. México DF: Colectivo de Análisis de La Seguridad con Democracia (CASEDE), 2010c, pp. 9 – 30.
- Benítez Manaut, Raúl, ed. *Seguridad y defensa en América del Norte. Nuevos dilemas geopolíticos*. Washington y San Salvador: Woodrow Wilson International Center for Scholars y Fundación D. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), 2010d.
- Benítez Manaut, Raúl, Abelardo Rodríguez Sumano y Armando Rodríguez Luna, eds. *Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2009*. México DF: Colectivo de Análisis de La Seguridad con Democracia (CASEDE), 2009.
- Benítez Manaut, Raúl y Armando Rodríguez Luna. 'México: El combate al narcotráfico, la violencia y las debilidades de la seguridad nacional', en Hans Mathieu y Catalina Niño Guarnizo, eds. *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2010*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010, pp. 173 – 186.
- Bertelsmann Stiftung. *BTI 2010 – El Salvador Country Report*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2009.
- Blickman, Tom. *Countering Illicit and Unregulated Money Flows. Money Laundering, Tax Evasion and Financial Regulation*, Amsterdam: Transnational Institute (Crime and Globalisation Debate Papers), 2009.
- Bobeas, Lilian. 'Criminalidad organizada: Los piratas modernos del Caribe', en Hans Mathieu y Paula Rodríguez Arredondo, eds. *Anuario 2009 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2009a, pp. 243 – 279.
- Bobeas, Lilian, ed. *La seguridad en el Caribe. Reformas y cooperación regional*. Washington and San Salvador: Woodrow Wilson International Center

- for Scholars y Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), 2009b.
- Bobeá, Lilian. 'Vicios privados, ¿Beneficio público?: Crimen organizado en el Caribe', en Hans Mathieu and Catalina Niño Guarnizo, eds. *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2010*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010, pp. 395 – 415.
- Borrero, Mansilla, Armando. 'Los militares: Los dolores del crecimiento', en Francisco Leal Buitrago (ed.) *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Grupo Norma Editorial, 2006, pp. 113 – 146.
- Briceno-León, Roberto. 'La violencia homicida en América Latina', *América Latina Hoy 50*, 2008, pp. 103 – 116.
- Briscoe, Iván. *The Proliferation of the "Parallel State"*. Madrid: FRIDE (Working Paper # 71), 2008.
- Briscoe, Iván. *A Criminal Bargain: The State and Security in Guatemala*. Madrid: FRIDE (Working Paper # 88), 2009.
- Briscoe, Iván and Martin. Rodríguez Pellecer. *A state under siege: Elites, criminal networks and institutional reform in Guatemala*. The Hague: Clingendael Institute of International Relations, Septiembre 2010.
- Brombacher, Daniel y Günther Maihold. *Cocaine Trafficking to Europe. Options of Supply Control*. Berlín: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP Research Paper RP 10), Septiembre 2009.
- Camacho Guizado, Álvaro. 'De narcos, paracracias y mafias', en Francisco Leal Buitrago (ed.) *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006, pp. 387 – 420.
- CEH. *Guatemala. Memoria del silencio*. Guatemala: Comisión para el Esclarecimiento histórico – UNOPS (12 vols.), 1999.
- CGR, *Política Colombiana, Revista de la Controlaría General de la República*, Número especial *El labirinto de la seguridad* Abril-Junio, 2010.
- CNRR. *La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas. II Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, área de DDR*. Bogotá: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Agosto 2010.
- CVR. *Informe final*. Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación (www.cverdad.org.pe), 2003.
- CVR. *Atún Willakuy. Versión abreviada del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*. Lima: Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004.
- Colectivo Maloka, ed. *La economía de las drogas ilícitas. Escenarios de conflictos y derechos humanos*. Barcelona: Generalitat de Catalunya and Fundació CIDOB (Materiales de Paz y Derechos Humanos # 11), Septiembre 2009.
- CONALTID. *Strategy for the Fight against Drug Trafficking and Revaluing of the Coca Leaf, 2007 – 2010*. La Paz: Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Droga, 2007.
- Corporación Observatorio para la Paz. *Guerras inútiles. Una historia de las FARC*. Bogotá: Intermedio Editores, 2009.
- Cruz, José Miguel and Nelson Portillo. *Solidaridad y violencia en las pandillas del gran San Salvador: Más allá de la vida loca*. San Salvador: UCA Editores, 1998.
- Cruz Neto, Otávio, Marcelo Rasga Moreira y Luiz Fernando Mazzei Sucena. *Nem soldados nem inocentes. Juventude e tráfico de drogas no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2004 (segunda edición).
- Degregori, Carlos Iván. *El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969 – 1979*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2010 (tercera edición).
- Degregori, Carlos Iván. *Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú, 1980 – 1999*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2011.
- Dowdney, Luke. *Children of the Drug Trade. A Case Study of Children in Organised Armed Violence in Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2003.
- Dreyfus, Pablo. 'Vino viejo en odres todavía más viejos: Tendencias regionales del crimen organizado en Latinoamérica en la primera década del siglo XXI y más allá', en Hans Mathieu y Paula Rodríguez Arredondo, eds. *Anuario 2009 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2009, pp. 175 – 189.
- Duncan, Gustavo. *De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta, 2006.
- EMCDDA. *The State of the Drugs Problem in Europe. Annual Report 2009*. Lisboa: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2009a.
- EMCDDA. *Identifying Europe's Information Needs for Effective Drug Policy, 6 – 8 Mayo 2009, Lisbon*. Lisboa: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, (EMCDDA Conference Proceedings), 2009b.
- European Commission – Directorate General Justice, Freedom and Security. *Drugs Action Plan for 2009 – 2012*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (2008/C 326/09), 2008.
- FES. *Situación del narcotráfico en el Perú, las políticas antidrogas y la geopolítica regional*. Lima: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional (Policy Paper # 23), Agosto 2008.
- Flores Pérez, Carlos Antonio. *El estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática*. México: Centro de Investigaciones and Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y Publicaciones de la Casa Chata, 2009.

- FRIDE. *Organized Crime, the State and Democracy. The Cases of Central America and the Caribbean*. Madrid: Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, 2007.
- Garay-Salamanca, Luis Jorge, Eduardo Salcedo-Albarán e Isaac De León-Beltrán. *Illicit Networks Reconfiguring States. Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases*. Bogotá: Fundación Método, 2010.
- Gavigan, Patrick. 'Organized crime, illicit power structures and Guatemala's threatened peace process', *International Peacekeeping* 2009, XVI (1), pp. 62 – 76.
- Gaviria, César, Ernesto Zedillo and Fernando Henrique Cardoso et al. *Drogas y democracia. Hacia y cambio de paradigma*. Río de Janeiro: Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia (con el apoyo del Open Society Institute, el Instituto Fernando Henrique Cardoso, Viva Rio y el Centro Edelstein de Pesquisas Sociais), 2009.
- García Díaz, Jaime y Jaime Antezana et al. *Diagnóstico de la Situación del Desvío de IQ al Narcotráfico*. Lima: Consejo Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), enero 2009.
- Garzón, Juan Carlos. *Mafia & Co. The Criminal Networks in Mexico, Brazil, and Colombia*. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2008.
- GGI. *Small Arms Survey. Surplus Arms in South America. A Survey*, Geneva: Graduate Institute of the University of Geneva, 2009.
- González, Fernán E., Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vázquez. *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá: CINEP (4ta edición), 2006.
- Gutiérrez, Francisco, María Emma Wills y Gonzalo Sánchez Gómez, eds. *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006.
- Gutiérrez Rivera, Lirio del Carmen. *Enclaves y territorios: estrategias territoriales del estado y de las pandillas en Honduras*. Berlín: Freie Universität Berlin – Latein Amerika Institut (Tesis PhD), 2009.
- Henao, O. Evelio. *El fin de las AUC. ¿Verdad o ficción?* Bogotá: Intermedio Editores, 2009.
- International Crisis Group. *Guatemala: Squeezed between Crime and Impunity*. Bruselas and Bogotá: International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worldwide, June 2010 (Latin America report # 33).
- IDL – DESCO. *Personal militar en situación de vulnerabilidad en el Perú*. Lima: Instituto de Defensa Legal and Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2009.
- Jácome, Francine. *Venezuela: Socialismo del siglo XXI y fuerza armada nacional*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, agosto 2008.
- Jacome, Francine. 'Defensa y seguridad. Bolívarianismo y socialismo del siglo XXI', en Hans Mathieu and Catalina Niño Guarnizo, eds. *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. Anuario 2010. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010, pp. 286 – 307.
- Jelsma, Martin. *Legislative Innovation in Drug Policy. Latin American Initiative on Drugs and Democracy*. Amsterdam: Transnational Institute, 2009.
- Jones, Gareth A. y Dennis Rodgers, eds. *Youth Gangs in Latin America. Gangs and Juvenile Justice in Perspective*. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Koonings, Kees y Dirk Kruijt, eds. *Fractured Cities. Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America*. Londres: Zed Books, 2007.
- Koonings, Kees y Dirk Kruijt, eds. *Megacities. The Politics of Urban Exclusion and Violence in the Global South*. Londres: Zed Books, 2009.
- Krakau, Philipp. *Narco-negocio y seguridad en México: Conceptos, efectos y posibilidades de cooperación con los Estados Unidos*. México: Friedrich Ebert Stiftung, 2009.
- Kruijt, Dirk. *Guerrillas. War and Peace in Central America*. Londres: Zed Books, 2008.
- Kruijt, Dirk. *Visión del conjunto de los de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzadas en Armas (ACR, Presidencia de Colombia) y el Programa de Paz y Reconciliación y (P y R, Alcaldía de Medellín)*. Bogotá: Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzadas en Armas (proyecto NPT-COL-173), Marzo 2009
- Kruijt, Dirk y Kees Koonings. *Stability Assessment Colombia*. La Haya: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael' – Conflict Research Unit, Septiembre 2007.
- Kruijt, Dirk y Kees Koonings. 'Colombia: A paradoxical state', FRIDE América Latina, <http://www.fride.org/publicacion/344/colombia-estado-paradojico> (17.01.2008), publicación # 344.
- Kruijt, Dirk y Maria del Pilar Tello. 'From Military Reformists to Civilian Dictatorship: Peruvian Military politics from the 1960s to the Present', en Kees Koonings y Dirk Kruijt, eds. *Political Armies. The Militar and Nation Building in the Age of Democracy*. Londres: Zed Books, 2002, pp. 35-63.
- Leal Buitrago, Francisco, ed. *Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz*. Bogotá: Tercer Mundo Editores y Universidad de los Andes, 1999.
- Leal Buitrago, Francisco, ed. *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Grupo Norma Editorial, 2006a.
- Leal Buitrago, Francisco. *La inseguridad de la seguridad. Colombia, 1958 – 2005*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, 2006b.

- Leal Buitrago, Francisco. 'Colombia: Elecciones atípicas y perspectivas inciertas', *Nueva Sociedad* No 229, septiembre-octubre 2010a, pp. 4 – 16.
- Leal Buitrago, Francisco. 'El laberinto de la seguridad', *Política Colombiana* # 04, Special Issue *El laberinto de la seguridad*, abril – junio 2010b, pp. 7 – 17.
- Leal Buitrago, Francisco. 'Los partidos en Colombia: en qué están y a dónde van', *Razón Pública, revista electrónica*, Lunes, 24 enero 2011.
- López Hernández, Claudia, ed. Y refundaron la patria ... *De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris and Random House Mondadori, 2010.
- Loría Ramírez, Max Alberto. 'La seguridad en Centroamérica con énfasis en el crimen organizado', in Hans Mathieu and Catalina Niño Guarnizo, eds. *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2010*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010, pp. 416 – 429.
- Maihold, Günther y Daniel Brombacher (2009). *Crimen organizado y seguridad en América Latina y el Caribe. Hacia un nuevo enfoque de la cooperación internacional: Opciones de Gobernabilidad*. Berlín: Stiftung Wissenschaft und Politik – Banco Interamericano de Desarrollo, Julio 2009.
- Martínez Ventura, Jaime. *Maras en El Salvador y su relación con el crimen organizado transnacional*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010.
- Mayorca, Javier. *Delincuencia organizada y poder político en Venezuela*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010.
- Mathieu, Hans y Paula Rodríguez Arredondo, eds. *Anuario 2009 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2009.
- Mathieu, Hans y Catalina Niño Guarnizo, eds. *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2010*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010.
- Medina Gallego, Carlos. *FARC – EP. Temas y Problemas nacionales, 1958 – 2008*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008.
- Medina Gallego, Carlos. *Conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Memoria casos FARC – EP y ELN*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2009a.
- Medina Gallego, Carlos. *FARC – EP. Notas para una historia política, 1958 – 2008*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009b.
- Medina Gallego, Carlos. *FARC – EP y el ELN. Una historia política comparada, 1958 – 2006*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2009c.
- Medina Gallego, Carlos. *Las estadísticas de la guerra*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2011 (manuscrito, 15 enero 2011).
- Meléndez, Javier, Roberto Orozco, Sergio Maoya y Miguel López. *Una aproximación a la problemática de la criminalidad organizada en las comunidades del Caribe y de fronteras en Nicaragua, Costa Rica y Panama*. Managua: Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) and Open Society Institute, Agosto 2010.
- Mesa, Manuela y Emmy Moorhouse. *Claves para entender la violencia transnacional en Centroamérica*. Barcelona: ICARIA, 2009 (Serie "Sociedad civil y construcción de paz", documento de trabajo # 6).
- Meyer, Maureen, con Stephanie Brewer y Carlos Cepeda. *Abused and Afraid in Ciudad Juarez. An Analysis of Human Rights Violations by the Military in Mexico*. Washington: Washington Office on Latin America (WOLA), Septiembre 2010.
- Ortíz, Román D. (2006) 'La guerrilla mutante', en Francisco Leal Buitrago (ed.) *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, pp. 323–356.
- Overseas Security. *El Salvador Country Security Report 2010*. www.overseassecurity.com (consultado 17 Junio 2010).
- PDH. *Informe anual circunstanciado 2009. Resumen ejecutivo*. Guatemala: Procurador de los Derechos Humanos, 2009a.
- PDH. *Informe anual circunstanciado 2009. Tomo II; Situación de los Derechos Humanos en Guatemala*. Guatemala: Procurador de los Derechos Humanos, 2009b.
- PDH. *Informe anual circunstanciado 2009. Tomo I: Memoria de labores*. Guatemala: Procurador de los Derechos Humanos, 2009c.
- Peacock, Susan C. y Adriana Beltrán. *Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en Guatemala pos conflicto y las fuerzas detrás de ellos*. Washington: Washington Office on Latin America (WOLA). 2004.
- Pécaut, Daniel. *Violencia y política. Ensayos sobre el conflicto colombiano*. Medellín: Editora Hombre Nuevo, 2003.
- PIEB, *Tinkazos. Edición especial antológica 2003-2010*, número 13, December, 2010.
- PNUD – UNAH. *Mortalidad y otros. Boletín enero – diciembre 2008*. Tegucigalpa: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Universidad Autónoma de Honduras, Observatorio de la Violencia, enero 2009.
- Procuraduría. *Proyecto Control Preventivo y de Seguimiento a las Políticas Públicas para el otorgamiento de Beneficios a la Población Desmovilizada y Reincorporada a la Vida Civil*. Bogotá: Procuraduría de la Nación, Mayo 2008.

- Quintana, Juan Ramón, ed. *Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente. Resultados preliminares*. La Paz: Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), 2003.
- RESDAL. *A Comparative Atlas of Defence in Latin America and Caribbean – 2010 Edition*. Buenos Aires: Red de seguridad y de defensa de América Latina, 2010.
- Rivas Gamboa, Ángela y María Lucía Méndez. *Agendas locales para la reintegración: Retos, experiencias y oportunidades*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, Serie informes # 7, Agosto 2008.
- Romero, Mauricio (2006) 'Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: Innovaciones, estancamientos y nuevas apuestas', en Francisco Leal Buitrago (ed.) *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI*. Bogotá: Grupo Norma Editorial, 2006, pp. 357–385.
- Rodríguez Pellecer, Martín. 'Centroamérica: Estado, crimen y ciudadanía', *Diálogo, Revista de la FLACSO, Guatemala* # 13, 17 Mayo 2010.
- Rangel, Alfredo, ed. *¿Cuál es el precio que debemos pagar?* Bogotá: Justicia y Paz e Intermedio Editores. 2009.
- Sáenz de Tejada, Ricardo. *Las izquierdas en Guatemala: De las rupturas a la recomposición*. Guatemala: manuscrito inédito (FLACSO), 2010.
- Salazar Ortuño, Fernando Benito. *De la coca al poder. Políticas públicas de sustitución de la economía de coca y pobreza en Bolivia (1975 – 2004)*. Buenos Aires and Bergen: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Comparative Research Programme on Poverty (CROP), 2008.
- Salazar Ortuño, Fernando Benito. *Movimientos sociales en torno a la producción de coca en Bolivia. Políticas de asentamiento, producción, erradicación de coca y desarrollo alternativo en el Trópico de Cochabamba, 1920 – 2006*. Cochabamba: Universidad Mayor de
- San Simón, Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Sociales y Económicos, 2009.
- Sánchez, Omar. 'Guatemala's party universe: A case study in underinstitutionalization', *Latin American Politics and Society* (2008) 50 (1), pp. 123 – 151.
- SAT. *Sistema de Alerta Temprana*. Bogotá: Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado, 2008.
- Savenije, Wim. *Maras y barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales en Centroamérica*. San Salvador: FLACSO, 2009.
- Selee, Andrew and Jacqueline Peschard, eds. *Mexico's Democratic Challenges. Politics, Government, and Society*. Washington y Stanford: Woodrow Wilson Center Press y Stanford University Press, 2010.
- Sieder, Rachel, Megan Thomas, George Vickers y Jack Spence. *Who Governs? Guatemala Five Years After the Peace Accords*. Cambridge, Mass.: Hemispheric Initiatives and Washington Office on Latin America (WOLA), 2002.
- Souza, Fatima. *PCC. A facção*. Río de Janeiro: Editora Record, 2007.
- Tellería Escobar, Loreta. 'Plurinational State and Armed Forces in Bolivia', en Hans Mathieu and Catalina Niño Guarnizo, eds. *Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2010*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung – Programa de Cooperación en Seguridad Regional, 2010, pp. 148 – 149.
- Thoumi, Francisco E. *Illegal Drugs, Economy, and Society in the Andes*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003.
- Thoumi, Francisco E. 'Organized Crime and Democratic Government in Colombia', en Francisco E. Thoumi et al. *The Impact of Organised Crime on Democratic Governance in Latin America*. Berlín: Friedrich Ebert Stiftung – Department for Latin America and the Caribbean, 2010, pp. 4 – 12.
- UNDP (PNUD). *El conflicto, callejón con salida. Informe nacional de desarrollo humano*. Bogotá: Editorial El Malpensante, 2003.
- UNDP. *Guatemala: Hacia un estado para el desarrollo humano. Informe nacional de desarrollo humano 2009/2010*. Guatemala: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010.
- UNHCR (ACNUR). *VI Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia*. Bogotá: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados/as, 2006.
- UNHCR. *Country Operations Plan 2008–2009*. Bogotá: United Nations High Commissioner for Refugees, 2007.
- UNODC. *Crime and Development in Central America. Caught in the Crossfire*. Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, Mayo 2007 (Publication, Sales No. B.07.IV.5).
- UNODC. *World Drug Report 2010*. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010a (Publication, Sales No. E.10.XI.13).
- UNODC. *Colombia. Coca Cultivation Survey*. Bogotá: United Nations Office on Drugs and Crime y Gobierno de Colombia, Junio 2010b.
- UNODC. *Perú. Monitoreo de cultivos de coca 2009*. Lima: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y Gobierno del Perú – Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Junio 2010c.
- UNODC. *Estado Plurinacional de Bolivia. Monitoreo de cultivos de coca 2009*. La Paz: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y Estado Plurinacional de Bolivia, June 2010d.

UNODC. *Ecuador. Monitoreo de cultivos de coca 2009*. Quito: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen y Gobierno del Ecuador, Junio 2010e.

UNODC. *Crime and Instability. Case Studies of Transnational Threats*. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime, Febrero 2010f.

UNODC. *The Globalization of Crime. A Transnational Crime Threat Assessment*. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010g (Publication, Sales No E.10.IV.6).

Van Dun, Mirella. *Cocaleros, Drugs, and Social Mobilisation in the Upper Huallaga Valley in Post – Conflict Peru*. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2009.

Vargas Meza, Ricardo. *The Statistics Bazaar. Statistics are another front of combat in the war on drugs in Colombia*. Bogotá y Amsterdam: Acción Andina y Transnational Institute, http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/brief32_0.pdf, Drug Policy Briefing # 32, Marzo 2010.

Vargas Velásquez, Alejo, ed. *El papel de las Fuerzas armadas en la política anti-drogas colombiana, 1985 – 2006*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, 2008.

Vargas Velásquez, Alejo. *Las fuerzas Armadas colombianas y el conflicto colombiano: Antecedentes y perspectivas*. Medellín: La Carrera Editores y Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, 2010 (segunda edición).

Vellinga, Menno, ed. *The Political Economy of the Drug Industry. Latin America and the International System*. Gainesville: University Press of Florida, 2004.

Villarraga Sarmiento, Álvaro. *La reinserción en Colombia, experiencias, crisis humanitaria y política pública*. Bogotá: Editorial Gente Nueva y Fundación Cultura Democrática, 2006.

Villarraga Sarmiento, Álvaro. *El Proceso de Paz en Colombia, 1982-2002*. Bogotá: Editorial Gente Nueva Biblioteca de la Paz. Bogotá, 2009 (5 Vols.).

Youngers, Coletta A. y Eileen Rosin, eds. *Drugs and Democracy in Latin America. The Impact of U.S. Policy*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2010.

Zaluar, Alba. *Integração Perversa: Pobreza e Tráfico de Drogas*. Río de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2004.

Zaluar, Alba y Marcos Alvito, eds. *Um século de favela*. Río de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2006 (quinta edición).

Copyright (CC) NIMD – Licencia Creative Commons-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Netherlands Licence. Puede compartir y hacer trabajos basándose en esta publicación solamente para propósitos no comerciales, bajo las condiciones que usted le atribuya correctamente y que la distribuyas solamente bajo una licencia idéntica a esta.

Publicado por NIMD, La Haya, Los Países Bajos © Junio 2011
ISBN/EAN: 978-90-79089-12-3

Autor

Dirk Kruijt

Comité editorial

Lizzy Beekman
Elena Carbonell
Samuel DuBois
Marieke Hoornweg
David Prater

Fotografía

Portada: Ana Cecilia Gonzales-Vigil / New York Times / Hollandse Hoogte
Ilave, Perú, mayo 2004, policías peruanos vigilan la calle después de la muerte por linchamiento del alcalde supuestamente corrupto.
Foto portada interna y interior: Sandra Sebastián
Contraportada interior: Roel Burgler

Diseño

Stephan Csikós, La Haya, Países Bajos

Impreso

ImPressed, Pijnacker, Países Bajos

Para descargar el archivo PDF de esta publicación o cualquier otra, vaya a: www.nimd.org

Este documento con una relación de datos y revisión de políticas – por encargo del Instituto Neerlandés de Democracia Multipartidista (NIMD) – es un análisis comparativo sobre los impactos de crimen organizado y específicamente del crimen relacionado con las drogas en los sistemas políticos latinoamericanos. El estudio se centró en México, Guatemala, Colombia y Bolivia. Los países analizados en este estudio tienen diferentes perfiles según la estabilidad interna, el nivel del crimen violento, la fuerza de las instituciones policíacas, el sistema de seguridad y judicial y las políticas nacionales con respecto al cultivo del coca, producción de cocaína y prevención del crimen. Los efectos en el sistema político, en las instituciones clave y en los partidos políticos también difieren por país.